

Si bien se puede hablar de elecciones competidas en ayuntamientos desde los años cuarenta, es a partir de 1989 cuando la competitividad electoral se ha dinamizado y generalizado.

No sin desgastes, persiste una lucha por las garantías democráticas, por la dignidad ciudadana. Han aparecido con eficacia, pese a contradicciones internas, frentes opositores por encima de partidos. Hay cada vez más rechazo a todo tipo de imposiciones. Crece una radicalidad ciudadana. Se va firmando una conciencia de que la ciudadanía está por encima de los partidos. Desde movimientos ciudadanos surgen planteamientos de reformas electorales a fondo que no permitan privilegios a unos en contra de una verdadera competencia y que cierren posibilidades a acciones tramposas: la única legitimidad democrática está del lado del voto libre y respetado.

Este libro se propone, entre otros puntos, discutir recientes comicios locales competitivos en numerosas entidades federativas y hacer una evaluación de la transición democrática que vive el país. De este modo, esperamos contribuir a propiciar una readecuación de nuestra cultura política y mostrar que la competencia electoral es una realidad que en el futuro cercano marcará profundamente los procesos electorales mexicanos.



LA JORNADA EDICIONES  
CENTRO DE INVESTIGACIONES  
INTERDISCIPLINARIAS  
EN HUMANIDADES / UNAM



ELECCIONES CON ALTERNATIVAS  
Jorge Alonso y Jaime Tamayo (coordinadores)



LA DEMOCRACIA EN MÉXICO

# Elecciones con alternativas

## Algunas experiencias en la República Mexicana

*Jorge Alonso y Jaime Tamayo*  
(coordinadores)



LA JORNADA EDICIONES  
CENTRO DE INVESTIGACIONES  
INTERDISCIPLINARIAS  
EN HUMANIDADES / UNAM

Primera edición: agosto de 1994

Derechos reservados:

© Centro de Investigaciones  
Interdisciplinarias en Humanidades UNAM

En coedición con

© Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.  
*La Jornada* Ediciones  
Balderas 68, centro  
México, D.F. C.P. 06050

ISBN 968-36-3864-3

Impreso y hecho en México

## ÍNDICE

Introducción <i>Jorge Alonso y Jaime Tamayo</i>	7
<b>I. ALTA COMPETITIVIDAD Y ALTERNANCIA</b>	<b>23</b>
Baja California: las elecciones de 1992 y la transición democrática <i>Tonatiuh Guillén López</i>	25
Chihuahua 92: anatomía de un voto <i>Víctor M. Quintana S.</i>	41
Chihuahua 92: saldos electorales <i>Rubén Lau</i>	65
<b>II. ELEVADA COMPETITIVIDAD Y SOLUCIONES POLÍTICAS</b>	<b>77</b>
Las elecciones locales de 1991 en Guanajuato <i>Guadalupe Valencia García</i>	79
San Luis Potosí, 1991. De elecciones a elecciones <i>Lillian Harris</i>	101

III. COMPETITIVIDAD EN ZONAS VEDADAS	121
Elecciones municipales y conflictos en Michoacán y Guerrero <i>Marco Antonio Calderón Mólgora</i>	123
Michoacán 92: la historia sin fin <i>Jaime Rivera Velázquez</i>	149
IV. COMPETITIVIDAD LOCALIZADA	177
Elecciones en Mazatlán (1989). Ni negociación ni reconocimiento: decisión autoritaria <i>José Enrique Vega Ayala</i>	179
Por segunda ocasión Mérida se tiñó de azul (el triunfo de Acción Nacional en noviembre de 1990) <i>Efraín Eric Poot Capetillo</i>	185
V. APERTURA DE ESPACIOS A LA COMPETITIVIDAD	209
Las elecciones locales de 1991 en Tabasco <i>Leonardo Curzio Gutiérrez</i>	211
Veracruz: la modernización truncada. Elecciones locales en Veracruz 1988-1992 <i>Mariano Baéz Landa y Luis A. Pérez González</i>	229
El auge ciudadano. Las elecciones jaliscienses de 1992 <i>Jorge Alonso y Jaime Tamayo</i>	263

## INTRODUCCIÓN

Hasta hace muy poco tiempo el escenario político de las elecciones locales era el predominio del partido del Estado en medio de una gran abstención, costumbres fraudulentas del régimen y protestas ciudadanas localizadas, algunas de ellas impregnadas de un airado rechazo a imposiciones sentidas como intolerables. En los últimos años la competencia electoral se incrementó y se han abierto espacios aun en regiones consideradas como coto del priismo. Los reclamos cívicos también se han extendido elección tras elección. Este libro se propone discutir recientes comicios locales competitivos.<sup>1</sup> Si bien se puede hablar de elecciones competidas en

<sup>1</sup> La competencia se ha dado desde que dos o varios seres han necesitado o apetecido un mismo bien, en cuya búsqueda se ha generado la rivalidad. Las guerras han sido la expresión más sangrienta de su presencia. Las competencias deportivas cuentan con una larga tradición histórica (se puede consultar el canto XXIII de la Iliada). El mundo económico se ha fraguado en medio de la competencia. El capitalismo se ufana de haberla dinamizado y achaca al socialismo real el que se hubiera estancado económicamente por la falta de competencia. Aunque se ha pretendido salvaguardarla con todo tipo de regulaciones, las diferencias entre los competidores han propiciado monopolizaciones. En política, con el avance de la democracia, la competencia por el poder público ha sufrido adecuaciones. Las discusiones en torno a lo real de la igualdad de condiciones de la ciudadanía de cara a lo electoral no han terminado. Aunque se han ido consiguiendo consensos en cuanto a las líneas fundamentales de un proceso democrático, subsisten puntos de fuertes debates. Se ha postulado que la democracia requiere igualdad en la votación, que los funcionarios públicos sean electos en comicios periódicos llevados a cabo limpiamente y sin coerción, participación efectiva, tiempo

recambios de ayuntamientos desde los años cuarenta,<sup>2</sup> y la disputa, aún por gubernaturas, ha ido subiendo de tono<sup>3</sup> a partir de 1989 cuando la competitividad electoral se ha dinamizado y generalizado.

Generalmente se ha considerado que las grandes transformaciones del sistema político mexicano se han desencadenado en buena medida después de una competida contienda presidencial, mientras que los procesos electorales locales (estatales o municipales) han sido visualizados como disputas entre los grupos políticos y las oligarquías locales, o cuando más, como aisladas luchas cívicas contra cacicazgos regionales. Hoy, sin embargo, la competitividad electoral local ha cobrado una importancia inusitada. No sólo se ha convertido en el espacio privilegiado de la contienda entre el partido del Estado y la oposición, ni es únicamente el nivel de gobierno en el que la alternancia en el poder es ya una realidad, sino que también se ha constituido en el laboratorio en el que el Estado mexicano ensaya, prefigura de manera vacilante diversos escenarios de modernización política, que hasta ahora no han trastocado la estructura central del poder. De esta manera encontramos que, ante la imposibilidad actual de resquebrajar la impenetrable estructura política central, las expresiones políticas opositoras y amplios sectores de ciudadanos perciben en los procesos locales un resquicio

necesario para asimilar la información que se requiere para formar una decisión (y contar precisamente con esa información), ningún tipo de exclusión y control del proceso. La posibilidad de la alternancia, el que cualquiera de los competidores pueda acceder al gobierno resulta fundamental. Un elemento básico tiene que ver con la igualdad de oportunidades, y para esto con una distribución equitativa de los recursos en torno a lo electoral. Se ha postulado también la necesidad de la existencia de una pluralidad de organizaciones independientes que se controlen mutuamente y al mismo proceso democrático. Queda por ver el peso real de organizaciones diferentes (cfr. Robert A. Dahl, *Dilemmas of pluralist democracy*, Yale University, 1992). Pese a la apariencia de lo individual del voto éste se inscribe en una acción de carácter colectivo que repercute en opciones acrcas del aprovechamiento o desperdicio del voto, de cara a las opciones que se presentan ante cada elector. Esta orientación colectiva es lo que refuerza los aspectos de competencia electoral (J. Elster, *El cemento de la sociedad*, Gedisa, Barcelona, 1991, pág. 31) sobre todo cuando colectivamente se debe defender el sentido del voto para defenderlo.

<sup>2</sup> El proceso electoral de León, Guanajuato, en 1946, es uno de tantos ejemplos.

<sup>3</sup> El caso chihuahuense en los años cincuenta, los de San Luis, Baja California y Yucatán en los sesenta y Nayarit en los setenta.

para irrumpir electoralmente, elevando las contiendas electorales locales a una dimensión auténticamente nacional.

Paradójicamente, estos procesos han posibilitado el margen de maniobra del centralismo y la concentración del poder en el Ejecutivo Federal al legitimar, ante la opinión pública, el mando discrecional del Presidente por sus intervenciones supuestamente encaminadas a "corregir fallas" de los sistemas electorales locales, lo cual ha repercutido en detrimento del federalismo y de la vigencia del orden jurídico. Así, la transición política no apunta necesariamente hacia la democratización, sino que coloca al Ejecutivo Federal en el vértice definitorio, el cual opta selectiva y arbitrariamente por estrategias diferenciadas según el peso regional de los opositores y las preferencias presidenciales. Si 1988 puso de manifiesto las enormes fisuras del viejo corporativismo, 1991 demostró que el neocorporativismo, particularmente el que se expresa a través del Programa Nacional de Solidaridad, funcionó para un proceso federal electoral que ante la opinión pública reforzó la figura presidencial. No obstante, este mecanismo no ha tenido los mismos efectos en comicios locales. Hay procesos en los que el electorado se ha expresado con una mayor identidad ciudadana.

El primer apartado de esta publicación destaca dos casos de entidades nortenas en donde la alta competitividad ha conseguido la alternancia. Baja California fue el primer estado en donde fue reconocido el triunfo de la oposición panista en 1989. Esto implicó un cambio en el sistema político regional e introdujo nuevos actores en la administración pública. El PRI, sin el apoyo de las instituciones gubernamentales locales, tuvo que aprender a comportarse como oposición. A su vez, el PAN regional se ha ido enfrentando al desgaste de ser gobierno. Existe una situación: la combinación de una política federal comandada por el salinismo y la política local bajo el control de un nuevo panismo que resiente también las contradicciones de los viejos cuadros albicelestes. Las primeras promesas presidenciales tampoco se traducen completamente en hechos y el gobernador panista ha resentido los efectos de no pertenecer a un grupo que lo mima en demostraciones públicas pero le entorpece una eficaz gestión en el gobierno cotidiano. Se propicia una readecuación de cultura política. Con las elecciones locales de Baja California en 1992 es posible hacer una evaluación de la transición democrática que vive esa entidad, en la que se ha roto el molde que el partido de Estado había im-

puesto a los estados federados. Otro caso paradigmático es el chihuahuense, el cual es examinado desde tres miradas complementarias. La usurpación de 1986 se convierte en restitución en 1992.

Un segundo apartado se dedica a examinar el comportamiento electoral que se produjo inmediatamente después de descalabros del PRI en dos estados del centro del país. Una muy elevada competitividad electoral y una posterior lucha cívica puso en cuestión el resultado de elecciones por la gubernatura. Los dos candidatos priistas fueron ungidos como ganadores, pero el repudio de los opositores orilló al régimen a buscar salidas políticas al margen del voto. Las conflictivas elecciones gubernamentales de Guanajuato dieron pie para que este estado quedara en manos de un gobernador interino, panista, identificado plenamente con el salinismo. Los empresarios locales han logrado a través de recursos y proyección de imagen un arrastre cívico importante que se expresa a través del PAN. Como en otros sitios, el peso de las figuras es mayor que el de los partidos. En San Luis Potosí un navismo maduro logró expandirse más allá de la capital del estado. El navismo logró una confluencia partidaria en la que la figura de Nava se colocó por encima de los partidos. Se combinaron un movimiento social con uno político. El frente pluripartidista se desmembró por la presión de la burocracia panista desde el centro del país. La lucha navista en contra del fraude fue decidida e innovadora. El papel de las mujeres resultó clave en la resistencia civil. El gradualismo panista no resistió un radicalismo cívico que presionaba por puntos centrales para garantizar el tránsito hacia la democracia y no concesiones secundarias. Se exigió una legislación confiable. El navismo, con la lucha por la democracia en el marco de las elecciones locales de 1991, traspasó los límites regionales y se colocó a nivel nacional. Así se dio pie para que un movimiento nacional ciudadano empezara a impulsarse desde San Luis Potosí. Si bien el panismo demostró en las elecciones municipales que aun sin el navismo disponía de fuerza considerable, pues pudo triunfar en varios municipios, entre ellos en la capital del estado, el navismo también pasó una prueba de fuego al impedir la candidatura del gobernador interino, no obstante que acababa de perder a su figura máxima, el doctor Nava.

En los casos de Guanajuato y de San Luis encabezaron la oposición personalidades con arrastre. Partieron de su influencia en las mayores ciudades de sus estados hacia el res-

to de las entidades. En ambos casos se denuncian graves irregularidades, y pese a fuertes impugnaciones y movilizaciones los candidatos del PRI fueron designados triunfadores. Para que no asumiera uno y para que renunciara otro se requirieron negociaciones con el centro, y de éste provino la orden. En estas dos entidades la oposición consiguió, no la fórmula acostumbrada de que los gobernantes caídos pidieran licencia y así se evitaran nuevas elecciones, aunque aplazadas, en ambos casos los gobernadores interinos tuvieron como principal cometido el preparar las elecciones extraordinarias. En los dos estados hubo posterior inconformidad de priistas descontentos por la caída de los declarados gobernadores. El PRI, tanto en Baja California como en Guanajuato, sufrió resquebrajaduras y se enfrentó a la desconocida tarea de ser oposición. En estas dos entidades los gobernadores panistas han hecho gala de su filiación salinista. Así, se han concedido posiciones a opositores cercanos y confiables. En los comicios locales de 1991 se puede destacar la similitud de tres casos. En Guanajuato, San Luis Potosí (en los que las elecciones eran para gobernador) y en Guaymas, Sonora (en donde la competencia era en torno a la alcaldía), tres líderes regionales de oposición con arrastre de masas se proclamaron triunfadores: Fox, Nava y Uribe. Su victoria no fue reconocida oficialmente. Las instancias electorales concedieron el triunfo a candidatos del PRI. La protesta de la ciudadanía fue intensa y larga. Se tuvo que llegar a negociaciones que no permitieron que los reconocidos oficialmente como triunfadores desempeñaran por mucho tiempo su cargo. Pero, aunque en Guanajuato el gobierno interino de la entidad recayó en un panista, en ninguno de estos casos los principales líderes opositores llegaron a gobernar. Hay un arreglo centrado en la caída de la figura del que fue candidato priista, pero no en un reconocimiento de que el voto ciudadano favoreció a los opositores. La negociación política se basa en el voto opositor, pero a éste no se le da el valor de decisión última. Esto incide en profundizar la poca credibilidad en los procesos electorales y en planteamientos que se convencen de que lo electoral no es la vía para empujar la transición hacia la democracia. Al lanzarse al proceso, los opositores tienen alguna creencia en el mismo. Al encontrarse con trabas para el respeto al voto el sentimiento de defraudación se afianza. Si en algunos momentos la amenaza por parte de partidos opositores de retirarse de las elecciones no pasa de eso, en el ánimo de muchos ciudadanos va

cobrando fuerza la interrogante de si acudir a las elecciones con tantos obstáculos es el camino. Ante situaciones de poca claridad electoral el desánimo no lleva a la inacción. Cada vez hay menos tolerancia frente a las irregularidades electorales. Hay sectores de ciudadanos para los cuales la demanda de democracia debe cumplirse ya y no se contentan con promesas de futuros democráticos mejores.

El tercer apartado se destina al recuento de una zona donde la competitividad ha sido poco tolerada por el régimen. Se trata de las regiones occidentales y sureñas en donde el neocardenismo se ha enraizado con fuerza. Michoacán y Guerrero, dos estados en donde la sacudida neocardenista de 1968 presagiaba más que una competencia un triunfo de la oposición para la tendencia de centro-izquierda, fueron el laboratorio para el ensayo de recomposición del partido del Estado. Las elecciones que se desarrollaron en esos estados fueron excesivamente conflictivas. Más allá de una agitada crónica se requirió un estudio comparativo de estos comicios. También se ofrece una evaluación de los últimos comicios michoacanos. De particular importancia en 1992 fueron los procesos para elegir gobernador en Chihuahua y Michoacán, ya que profundizaron no sólo lo que tres años atrás se denominó democracia selectiva (cuando el gobierno reconoció el triunfo panista en Baja California y obstaculizó la expresión ciudadana en Michoacán), sino que mostraron con mayor claridad que lo que cuenta en México para el recambio de poderes es la voluntad presidencial y no la voluntad de los electores. La democracia se ha falsificado peligrosamente. El trato diferente se debe a los cálculos del salinismo para afianzar su poder en lo que le restaba del sexenio. Se ha empeñado en aplastar la oposición cardenista. Se ha empeñado en un trato marcadamente diferente con la dirección panista para allegarse a los blanquicelestes y debilitar las relaciones entre los principales partidos opositores. Esto ha conllevado, además, el desprestigio de la dirección alvarista en el PAN, lo cual originó una importante escisión en ese partido. En lo electoral hay competencia desleal. Mientras en Chihuahua el peso se dejó en manos del gobierno del estado, en Michoacán el gasto de la campaña oficial corrió por cuenta del poder central. Se denunció el despilfarro, el abuso, lo ostentoso. Volvieron a aparecer los vicios en el padrón electoral. No hubo honradez informativa. El gobierno realizó una sistemática campaña de desinformación y fraguó una imagen de violencia en torno al PRD. Se gastó mucho más

del erario público en la campaña del PRI en Michoacán que en Chihuahua. Se utilizó la compra de votos, la coacción y la intimidación. En el primer caso se reconoció de inmediato el triunfo del candidato panista. En el segundo, se declaró gobernador electo al priista, pese a los graves señalamientos de fraude. Ante las movilizaciones locales y nacionales y la situación de ingobernabilidad se le "renunció" para sustituirlo por un interino, también priista. Hasta aquí llegó el margen de negociación que el régimen se trazó frente al PRD.

Existen comicios que se distinguen por una competencia concentrada en ciertos municipios. Hay varias alcaldías ganadas por la oposición. Como ejemplos se seleccionaron las contiendas de Mazatlán en 1989 y de Mérida en 1990. La contienda entre panistas y priistas por los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán marcan el avance opositor y las retorcidas soluciones que ofrece el régimen. En 1990 el PAN volvió por sus fueros en Mérida, Yucatán. El triunfo panista estuvo conectado con la caída del gobernador.

Finalmente, en el último apartado se reunieron estudios sobre procesos en los que la competencia electoral ha ganado espacio. Abre esta sección uno de los estados que había sido espacio privilegiado del voto oficialista y que experimentó una fuerte lucha electoral. En Tabasco, desde 1988 hay un reto de oposición neocardenista al PRI. Desde la misma nominación de los candidatos de este partido surgieron fuertes impugnaciones. El nepotismo del gobernador Neme Castillo contribuyó a que desprendimientos del partido del Estado se sumaran a los contingentes del PRD. La contienda más fuerte se dio después de las elecciones. Para evitar que la oposición fuera reprimida, se planeó una marcha que bíblicamente adoptó el nombre de "éxodo". Ésta, en su peregrinaje hacia la capital de la República, fue levantando manifestaciones de protesta a través de Veracruz, Tlaxcala y Puebla, y de ser una táctica partidaria se transformó en cívica. Finalmente, en la ciudad de México en donde fue recibida por una concentración masiva de ciudadanos, abrió negociaciones y logró que se desconocieran presidentes municipales repudiados. Las marchas de los navistas y de los tabasqueños marcaron a 1991 como un año en el que las protestas electorales se colorearon fuertemente de un carácter cívico opositor y sirvieron como efecto de demostración para otras luchas populares. El "éxodo" abrió puertas para la negociación y fue un elemento más para la caída del gobernador de Tabasco. En Veracruz, habiendo sido hasta antes de 1988 un



estado de tradicional dominio priista, se han ido extendiendo movilizaciones para impugnar resultados en numerosos municipios. Se ha engendrado en más de la mitad de los municipios un sentimiento antipriista. No es posible hablar todavía de un electorado con una nítida identificación política o ideológica. La conflictividad llevó al gobierno a tener que ceder algunos municipios ante presiones ciudadanas. Los opositores de la zona de Los Tuxtlas se sumaron a la protesta que iba de Tabasco rumbo a la ciudad de México. Hidalgo es otro estado en donde el pleno dominio priista ha sufrido resquebrajaduras. En 1992 hubo elecciones locales en Jalisco. En esta entidad se dio una paradoja. Pese a que la historia electoral del estado registró el mayor número de triunfos opositores reconocidos, la oposición reclamó con energía la aceptación de más victorias. También en este estado los partidos opositores organizaron dos marchas: una de la costa a la capital del estado, otra de Los Altos de Jalisco hacia la ciudad de México. La oposición jalisciense no se contentó con la caída del vocal del Registro Nacional de Electores ni con la promesa de nueva ley electoral. Las explosiones de drenajes en Guadalajara, el 22 de abril, fueron la puntilla para que se acabara de desmoronar un gobierno que había sido muy impugnado por la ciudadanía. Elecciones competidas aunadas a problemas de gobernabilidad, de mediados de 1988 a finales de 1992, repercutieron en la caída de ocho gobernadores.<sup>4</sup>

El año de 1991 fue un periodo muy intenso en actividad electoral. Además de las elecciones federales, hubo 14 elecciones locales en 11 estados. Cuatro de ellas no fueron competidas,<sup>5</sup> en otras tres la competencia fue localizada en algunos municipios,<sup>6</sup> otras dos podrían calificarse como competencia media,<sup>7</sup> y en las cinco restantes hubo alta competencia.<sup>8</sup> En Colima la competencia se dio no entre los partidos, sino previamente en las elecciones internas del PRI para designar al candidato a la gubernatura. Lo más signifi-

<sup>4</sup> Villcaña en Michoacán y Leyva en Baja California, a raíz de resultados de elecciones federales de 1988. Posteriormente a elecciones locales, Manzanilla en Yucatán, Aguirre en Guanajuato, Zapata en San Luis Potosí, Neme en Tabasco, Cosío en Jalisco y Villaseñor en Michoacán.

<sup>5</sup> Chiapas, Tlaxcala, Colima y Morelos. Lo cual no implicó que no se hubieran dado protestas en varios municipios en donde los partidos opositores denunciaron fraudes.

<sup>6</sup> Campeche, Veracruz, Sonora.

<sup>7</sup> Las dos de Nuevo León.

<sup>8</sup> La de Tabasco, las dos de San Luis y las dos de Guanajuato.

cativo de esta competencia intrapartidaria fue el triunfo del precandidato de las fuerzas políticas locales frente a la precandidatura sostenida por el centro. A partir del desgaste que sufrió el partido del Estado en esta competencia interna, tanto porque enconó conflictos y divisiones como porque exhibió tácticas ilegales al interior del PRI, exceptuando el simulacro habido en Nuevo León, para las demás entidades el PRI prefirió las denominadas candidaturas de unidad, que siguieron siendo una imposición centralista. En Nuevo León se puede hablar de que existe una competencia entre el PRI y el PAN en la zona metropolitana. Éste es quizá uno de los estados en donde más claramente podemos identificar una cultura política partidaria; no obstante las pugnas se deciden más que por los partidos por las personas postuladas.

El año de 1993, considerado como un año políticamente muy importante por ser el inmediatamente anterior al de la sucesión presidencial en el que se perfilan los que serán candidatos a esa contienda, vino a confirmar tendencias manifiestas en las elecciones locales: por un lado creciente competitividad, pero por otro, alto abstencionismo. El grueso de la ciudadanía se desentiende, y una minoría activa, escindida, disputa entre sí con fuerza las elecciones. Se ha venido presentando una polarización local electoral cada vez mayor y un trato diferenciado a los dos principales partidos opositores. Así surgió un arrollador, como inesperado, triunfo panista en los más importantes municipios del que fuera feudo priista, el estado de Baja California Sur. Ahí, el candidato a gobernador del PRI apenas superó por unos cuantos votos al panista, cuando el blanquiazul se alzó con la votación de los municipios más poblados y ganó la mayoría en el congreso local. Las explicaciones entraron en contradicción. Por un lado se destacaba que había surgido un voto de castigo al PRI y por otra se argumentaba que se había dado un voto diferenciado. El candidato a gobernador por el PAN denunció que se había gestado un enorme fraude. De nueva cuenta la dirección nacional panista adoptó una postura más cercana al entendimiento con el poder que de defensa del voto ciudadano. Simultáneamente, se presentó una desairada cuanto conflictiva elección en Guerrero.

Pese a la mayor competitividad electoral en los comicios locales, éstos, sin embargo, guardan una serie de rezagos con respecto a los nacionales. Esta situación configura precisamente una trampa para la oposición. Los opositores se ven orillados a buscar en el centro la solución a los más

encontrados conflictos electorales locales. Destaca el hecho de que las legislaciones electorales de las entidades federativas se encuentran atrás de la legislación federal. Las trabas para la participación de los partidos opositores es mayor. La oposición se ha quejado de la poca credibilidad de los padrones electorales y de manipulación en la entrega de las credenciales de elector. Entre los partidos se ha ido incrementando una guerra de encuestas acerca de la inclinación electoral de la ciudadanía. Entre las denuncias más frecuentes de la oposición se encuentran el que el PRI utiliza recursos estatales para financiar sus campañas, sesgo en el nombramiento del personal en las mesas electorales, la parcialidad hacia el partido oficial de parte de personal del instituto electoral, exclusión de representantes partidarios y aun el recurso a viejas maniobras para aumentar la votación del partido del Estado. Pero el punto más reiterado se refiere a sofisticados dispositivos de lo que se ha denominado ingeniería electoral. Generalmente los tribunales y los colegios electorales no resuelven las principales denuncias. Los conflictos que permanecen tienen que recibir un tratamiento especial por parte del Ejecutivo, y en elecciones muy competidas la intervención presidencial se hace necesaria.

Hay escasa confianza en la limpieza de los comicios. En todos los procesos el gobierno promete transparencia. Mientras el PRI declara en cada una de las elecciones que ésa ha sido de las más limpias y que no necesita del fraude para ganar, la oposición se ha encargado de refutarlo. Todavía se siguen combinando procesos con muy poca participación de la ciudadanía alejada de las urnas, y otros donde la protesta electoral se hace masiva y persistente. Se ha denunciado que el partido del Estado ya utiliza a su favor el abstencionismo, ya incrementa las votaciones a través de métodos de nuevo corporativismo presionando a través de las obras y servicios vía el Programa Nacional de Solidaridad y una numerosa y costosa burocracia de promotores del voto. Cuando las campañas opositoras suelen penetrar entre los ciudadanos, en fechas cercanas a las elecciones, el PRI ha solido denunciar a la oposición de incitar a la violencia.

Se va haciendo una constante que ante las diferentes fechas electorales, voceros eclesiásticos demandan elecciones creíbles. A su vez, en todos los comicios el comportamiento de los medios de comunicación es una pieza importante para el partido del Estado. La mayoría, sobre todo los de más penetración como son los medios televisivos, difunden amplia-

mente las campañas del PRI e ignoran o dan muy poco espacio a los opositores. No obstante, el comportamiento sobre todo de la prensa extranjera ante las impugnaciones de candidatos opositores influye en el desenlace de las negociaciones poselectorales.

La imputación de una tácita alianza entre la dirección panista y el salinismo le ha acarreado a ese partido conflictos internos y fuertes críticas externas. Simultáneamente la acusación de intransigencia de la dirección perredista frente al salinismo le ha valido que se le acuse de que eso le ha obstaculizado un crecimiento electoral. Aunque en el PAN hay aprobación en torno a la política económica del salinismo (algunos opinan que el PRI está gobernando con el programa de Clouthier), tanto este partido como el PRD se han opuesto a que el régimen privilegie la apertura económica y no haya dado suficiente apertura en lo político. En el PRI se dio una impugnación en contra de lo que consideraron cesiones ante la oposición. Las gotas que derramaron el vaso fueron la caída del gobernador michoacano Villaseñor, y la renuncia a la candidatura a la gubernatura de San Luis por parte del que había sido el gobernador interino. La presencia de un abultado número de gobernadores interinos en el país y la poca seguridad que tenían los candidatos priistas de ocupar el puesto deseado agitó sobre manera la inquietud entre las filas priistas. El presidente Salinas tuvo que dar la cara a los viejos priistas para prometerles que ya no habría más soluciones de interinatos. En esta forma las elecciones taumaulipecas mostraron que, pese a la presión popular, ya no se cederían posiciones sino que se presionaría a los opositores aun con mano dura. Pareció que se alentaba aún más a los instrumentadores oficiales de los fraudes electorales. No obstante, el cambio del gobierno norteamericano y la prisa del gobierno mexicano por completar el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos constituyen un escenario menos favorable para que el régimen salinista prosiga sin más perpetrando fraudes y concitando la protesta ciudadana. En el contexto de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, las condiciones electorales mexicanas llegan a hacerse presentes. Empresarios mexicanos han exhortado a entrar limpios al Tratado aun en lo electoral. Congresistas norteamericanos y centros de derechos humanos canadienses han llegado a plantear el condicionamiento del Tratado a la limpieza electoral en México. Ante la nueva administración norteameri-

cana la manía antidemocrática del gobierno mexicano puede empezar a pesar.

Se ha categorizado que en México se vive una democracia limitada, secuestrada. Los principales partidos opositores insisten en la falta de voluntad gubernamental para asegurar unos comicios realmente limpios y transparentes. Uno de los puntos más señalados es la impunidad para quienes desde el mismo gobierno son los responsables últimos del no cumplimiento cabal de las leyes electorales.

Las movilizaciones en contra de irregularidades electorales han ido en aumento. Las protestas van desde los cauces legales de reclamo, pasando por la resistencia cívica, hasta actos donde el repudio se tiñe de violencia. Así, surgen diferentes actitudes como la de representantes opositores que se retiran de instancias electorales, elaboración de escritos públicos en donde se documentan las anomalías, bloqueos carreteros, marchas, plantones, cercos a los palacios municipales, tomas de los inmuebles públicos, largas marchas hacia la capital de la República. Los conflictos en algunos lugares se prolongan y enconan. No todos tienen soluciones inmediatas. Muchas veces no se reconoce el triunfo opositor, se llega a una mediación a través de formar concejos municipales. Esta fórmula también sirve para atenuar el crecimiento de la oposición. Otras veces los opositores han utilizado las movilizaciones para negociar posiciones políticas con los gobiernos locales. Tal parece que en algunos casos es más importante lograr resonantes movilizaciones que votos ciudadanos. La falta de credibilidad en los procesos electorales es un factor que condiciona y privilegia esta vía *sui generis* para nombrar y destituir autoridades y representantes populares.

Otra polémica que ha surgido en torno a los comicios es la pertinencia de la observación electoral por medio de organismos y ciudadanos independientes de la estructura electoral. Durante 1991 en Morelos hubo observadores canadienses; en San Luis y Tabasco, mexicanos de diferentes instituciones. Cada proceso electoral que presagia alta competitividad atrae a los observadores electorales, los cuales van constatando y probando que no se ha dado ningún proceso en el que no haya habido irregularidades electorales. El gobierno ha argumentado que la observación internacional implica un atentado en contra de la soberanía, aunque esa posición ha ido cediendo sobre todo ante la urgencia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Los acuerdos pa-

rales planteados por el gobierno de Clinton pueden incidir en conducir al gobierno mexicano a la aceptación de observadores extranjeros en los comicios presidenciales mexicanos de 1994. El PRD ha respondido que la política económica es la que debilita la soberanía, y que los observadores internacionales pueden ser un elemento que coadyuve en la búsqueda de la limpieza electoral dada la incredulidad que hay ante los resultados electorales oficiales. Tanto el PAN como el PRD han acudido a organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos para plantear querrelas electorales. En algunas entidades se acepta la observación ciudadana por parte de mexicanos. Y hay sitios, como Jalisco, donde la legislación les prohíbe estar en las casillas. Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos creada por la Presidencia de la República se declaró incompetente respecto a las quejas electorales, muchos organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos se han pronunciado contra violaciones a derechos políticos de ciudadanos.

No sin desgastes persiste una lucha por las garantías democráticas, por la dignidad ciudadana. Han aparecido con eficacia, pese a contradicciones internas, frentes opositores por encima de partidos. Hay cada vez más rechazo a todo tipo de imposiciones. Crece una radicalidad ciudadana. Hay militancias regionales con resistencias frente a orientaciones y negociaciones cupulares de las burocracias centrales de sus partidos. Si hay tensión entre ciudadanía y gobierno en cuanto a una pugna por la autonomía frente al control, este fenómeno ha ido trascendiendo hacia el interior de los partidos. Se va fincando una conciencia de que la ciudadanía está por encima de los partidos. Desde movimientos ciudadanos surgen planteamientos de reformas electorales a fondo que no permitan privilegios a unos en contra de una verdadera competencia y que cierren posibilidades a acciones tramposas.

El Ejecutivo trató de legitimarse con algunas negociaciones electorales. Si bien con esto consiguió aumentar popularidad, de ninguna manera implicó la democratización de la vida nacional sino el incremento del poder discrecional presidencial con la consecuente disminución del Estado de derecho. La única legitimidad democrática está del lado del voto libre y respetado. Aunque a los ojos de la población haya evidencias de trampas, legalmente muchos fraudes son de difícil documentación. Los conflictos electorales introducen un fuerte elemento de ingobernabilidad por los agravios

que implican para una gran porción de ciudadanos. Los atropellos electorales conllevan fuertes ofensas a la ciudadanía que no suelen repararse, pues el pueblo se queda esperando justicia cuando a lo sumo se mitigan las afrentas a través de negociaciones. La única manera de romper con este círculo vicioso es una reforma electoral democrática que elimine tanto los factores que propician la falta de credibilidad en los procesos electorales como la discrecionalidad fáctica que posee el Presidente. En ambos sentidos el primer paso es la organización y realización de las elecciones por organismos independientes del gobierno y la conversión del PRI en auténtico partido, lo cual implica su real separación de la estructura estatal.<sup>9</sup>

Existen movimientos ciudadanos reacios a centrarse en la visión de posiciones electorales inmediatas. Les importa ir sentando principios y elementos sólidos para la democracia. También el caso de la capital potosina indica la dificultad del partido del Estado para reconocer los triunfos opositores. Éstos se dan pero en medio de grandes pugnas. Hay que ganar las votaciones, presionar y ganar algo en las negociaciones. Esto es un atraso democrático. La oposición cada vez gobierna más municipios. Con cada elección aumenta el número de entidades en donde se experimenta alta competitividad electoral. Las modalidades que tienen los tres gobiernos en manos de panistas son diferentes entre sí, aunque todos tienen la modalidad de estar encabezados por cuadros albicelestes que han confesado su admiración por el salinismo. La pluralidad política, con más trabajos en unos casos que en otros, ha cambiado radicalmente la geografía electoral en los últimos años. Sin embargo, la estructura política central ha permanecido incólume y aun se ha fortalecido el

<sup>9</sup> Con la reforma del PRI en 1993 se intentó aparentar que el PRI ya no sería el partido del gobierno. Pero una de las primeras medidas fue el pedir un alto financiamiento a empresarios. Con esto quería que se olvidara su carácter de partido subsidiado por el gobierno. Pero, independientemente de que la práctica de comprometer a sectores importantes del empresariado en financiamientos partidarios es añeja, lo que en 1993 se pretendió fue una gran simulación. Los empresarios alegaron que podían invertir donde quisieran. Y eso era lo que estaban haciendo. No otorgando dádivas sino haciendo inversiones. Le cobrarían con creces al gobierno su aportación. Por arriba de la mesa estaba la apariencia de un financiamiento con orígenes claros. Por debajo de la mesa no se veían los compromisos que devolvían recursos estatales al sector empresarial a cambio del financiamiento del partido que no dejaba de ser del Estado.

centralismo presidencialista. De no darse en este ámbito una profunda reforma democrática y federalista se corre el riesgo que no se pase de algo parecido a una descentralización para la toma de decisiones administrativas, lo cual tendría de hecho poca trascendencia política. Hay movimientos para los cuales las negociaciones llegan más rápido, dependiendo del comportamiento opositor y del desdoro que dicho movimiento implique para la Presidencia de la República. La trascendencia hacia medios de comunicación internacionales resulta clave en esto. No importa tanto el respeto al voto sino las implicaciones para la imagen presidencial. Cuentan también los márgenes de maniobra que la oposición se fija en las negociaciones electorales. Los partidos que muestran mayor apego a los principios de respeto a la democracia y respeto al voto se enfrentan a mayor intransigencia gubernamental.

El índice de competitividad electoral ha ido en aumento.<sup>10</sup> También la conflictividad en torno a los comicios. El partido del Estado ha pedido a los partidos opositores que dejen de hacer denuncias de fraude, y éstos han puntualizado que lo harán cuando el régimen abandone las prácticas de los fraudes electorales. Hay momentos en que un amplio sector de ciudadanos, por la falta de credibilidad de los comicios, prefiere no acudir a las urnas. No obstante, intermitentemente se ha venido constatando la persistencia del reclamo democrático. La competencia electoral es una realidad que en el futuro cercano marcará profundamente los procesos electorales mexicanos y que contribuirá a la configuración de una transición democrática donde se abandonen trampas y simulaciones.

*Jorge Alonso y Jaime Tamayo*

<sup>10</sup> Silvia Gómez Tagle demuestra esto a través de cuadros que pueden consultarse en su libro *La frágil democracia mexicana: partidos políticos y elecciones*, G. V. Editores, México, 1993.

## EL AUGE CIUDADANO. LAS ELECCIONES JALISCIENSES DE 1992

Jorge Alonso\*  
Jaime Tamayo\*\*

### INTRODUCCIÓN

Las elecciones federales permitieron al gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, ufanarse ante el presidente de la República por haber cumplido con creces las directrices del centro, encaminadas a conseguir cifras oficiales que redujeran la participación electoral de la oposición y que posibilitaran un Congreso cómodo para las reformas presidenciales. En contraste, medio año después, las elecciones locales le implicaron al gobernador una situación de gran debilidad política interna. También esas elecciones fueron fraudulentas y denunciadas. Pero en febrero de 1992 la protesta se organizó y trascendió los límites de la entidad federativa. Ambas elecciones fueron repudiadas por los partidos de oposición. En las locales la protesta alcanzó las calles, los caminos y las plazas. Si los comicios federales terminaron con un triunfo del Estado y del presidencialismo, las locales en Jalisco produjeron un fuerte cuestionamiento que emergió de sectores agraviados de la sociedad.

\* Investigador del CIESAS-Occidente.

\*\* Investigador de CISMOS de la U. de G.

## CANDIDATURAS EN CONFLICTO

No bien habían pasado las sospechosas elecciones federales del 18 de agosto de 1991, cuando los sorprendidos panistas se enteraban de que el municipio de Tepatitlán, gobernado por un ayuntamiento albiceleste, había perdido un amparo y tendría que pagar varios millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Mientras tanto en los partidos se empezaban a mover las aguas con vistas a las elecciones locales que, en esta ocasión, debido a modificaciones en la ley, no serían en diciembre sino en febrero.

Nunca los priistas jaliscienses habían cosechado tal cantidad de votos como en los comicios federales de 1991. En el PRI, pese a los cuestionamientos de los partidos opositores y de los observadores sin partido reinaba la euforia. No obstante, priistas críticos agrupados en el Frente Amplio por la Democracia a finales de septiembre demandaron el cumplimiento de las promesas sobre democracia interna. Plantearon que los aspirantes a las diputaciones y a las presidencias municipales que el PRI postulara como candidatos emanaran de consultas a las bases del partido. Se opusieron a los llamados candidatos de unidad que no eran otra cosa sino dedazos, imposiciones y cuotas de poder.

Una vez que el PRI estatal dio a conocer una lista de precandidatos, el FAD instó porque no fuera definitiva y porque se abriera el proceso de selección. El FAD acusó a la dirección del PRI de impedir la democracia y de designar candidatos de arriba hacia abajo. El encargado de organización del tricolor en Jalisco anunció que su partido no necesitaba elecciones preliminares, pues más bien las bases eran las que consultaban a los dirigentes y que el PRI se alistaba para conseguir más de un millón de votos.

Priistas del Movimiento Democrático de Acción Partidista (MODAP), inconformes por las designaciones de candidatos, a mediados de noviembre se manifestaron en San Juan de los Lagos, Tala, Magdalena, Ayutla, Mazamitla y Arrenal. El comité directivo estatal del PRI rechazó el registro de los candidatos fadistas. Los grupos inconformes al interior del partido oficial se movilizaron intentando inútilmente sacar adelante a sus candidatos. Pronto estallaron los conflictos. Hubo descontento en 32 municipios. La molestia se manifestó con más fuerza en Poncitlán, Tlajomulco, Teocuitlán, Sayula, Zacolaco, Puerto Vallarta, Degollado Ixtlahuacán del Río, El Salto, Guachinango y Ciudad Guzmán. Entre bases

priistas surgieron fuertes críticas a causa de las candidaturas a diputaciones. El gobernador, quien se había reservado la última palabra en el proceso de designación de candidatos, subestimó estas muestras de descontento.<sup>1</sup>

La iniciativa presidencial para reformar el artículo 27 constitucional ahondó el malestar entre campesinos jaliscienses ligados al PRI. Así ejidatarios de Cihuatlán, inconformes con la imposición del candidato del PRI y con la política agraria del régimen, anunciaron que apoyarían al PRD. También en otros municipios como Zacolaco, Poncitlán, Jamay, Tamazula, Cocula, Villa Purificación y El Limón, campesinos priistas se pasaron al PRD. El FAD se quejó de que nunca habían existido tantos conflictos y denunció que en la dirigencia partidista no había voluntad para abrir el proceso interno. Los partidos opositores consideraron que los dedazos habían desgastado al PRI en Jalisco.

Entre las principales corrientes panistas del estado también se agudizaron los problemas. A mediados de octubre la asamblea estatal y la 33 convención fueron primero interrumpidas y luego suspendidas por trifulcas entre panistas adversos. Se estaba discutiendo si el PAN debía participar o abstenerse de hacerlo en las elecciones locales. Las corrientes panistas no llegaron a acuerdos. En el caso de la candidatura blanquiazul por el municipio de Zapopan, el enfrentamiento fue acre entre los seguidores de la dirigencia estatal y los neopanistas impulsados por el DHIAC. En la asamblea municipal hubo de nuevo problemas. Finalmente el candidato por el PAN en Zapopan declaró que si ser neopanista es tener premura por llegar al poder, sí era neopanista. Así concordaba en algo con el candidato del PRI, que propagandizó en bardas que aspiraba al poder. El DHIAC, a finales de noviembre, fijó su postura ante el proceso electoral recalando que no tenía que ver con el PAN, y que estaría atento a las propuestas de los candidatos del PRI y del PAN. La convención panista que designó al candidato a la presidencia de Guadalajara no sufrió sobresaltos.

En el PRD, que por sus divisiones alcanzó pocos votos en las elecciones federales de Jalisco, se empezó a manejar la idea de lanzar un candidato de consenso. No obstante, pese a varios intentos y aun acuerdos, también hubo enfrenta-

<sup>1</sup> Los candidatos del PRI a diputados y la mitad de las planillas en pos de los ayuntamientos, entre ellos los de mayor importancia en la entidad, habían dependido directamente de Cossío Vidaurri.

mientos internos en la convención en donde se postuló al candidato a la alcaldía de Guadalajara. Las secuelas de la integración perredista con tres partidos y cuatro organizaciones han agudizado la integración de ese partido en la entidad. El PPS planteó la necesidad de que los partidos de izquierda se coaligaran para enfrentar al PRI y al PAN. Por su parte, el PFCRN lanzó la baladronada de que ganaría la alcaldía tapatía.

Sólo el PRI registró candidatos en los 124 municipios del estado. El PAN lanzó 81 planillas, el PPS 61, el FCRN 47, el PARM 45, el PRD 41. Para los comicios de diputados el PRD no pudo integrar todas las candidaturas, y sólo se presentó en 17 de los 20 distritos. En varios de los puntos en donde se había dado una fuerte impugnación a los candidatos impuestos por el PRI se configuró una opción a través del PAN. En Tala, el PAN y el PRD optaron por apoyar una candidatura común. En Gómez Farías, hubo una asamblea antes de la postulación opositora. Lo claro era que no querían al del PRI. Tenían, además, un candidato propio. Decidieron que la gente optara por un partido que lo postulara. En una asamblea de 300 gentes, todas en contra del PRI y en favor de su propio candidato, cuando se preguntó por cuál partido habría que registrarlo el PRD tuvo 13 votos y el PAN 27. La mayoría quería una candidatura de oposición, lo del partido en particular quedaba en segundo plano.

#### LAS TRAMPAS DEL PADRÓN

Se dio el anuncio de que se habían puesto a funcionar módulos de empadronamiento cuando en los partidos se daba la pugna por las nominaciones. El empadronamiento debía terminar a mediados de diciembre. El coordinador de la vocalía del Registro Federal de Electores en Jalisco se quejó de las impugnaciones que hacían los partidos hacia el padrón, y alegó que los partidos habían avalado dicho padrón con su firma. Anunció que para los comicios locales la meta era entregar las 200 mil credenciales reimpresas después de que en agosto habían sido destruidas porque no habían sido entregadas a los electores correspondientes. Otro objetivo a alcanzar era empadronar 200 mil nuevos ciudadanos y catalogar a los que no lo habían sido en el proceso federal. Para el 18 de noviembre se anunciaba que se habían registrado 17 mil 645 nuevos ciudadanos. Ante el Registro el PAN hizo

una manifestación exigiendo un padrón confiable. Al término del plazo para el empadronamiento el delegado del Registro Federal de Electores declaró que de los pendientes de empadronar lo habían hecho alrededor de unos 100 mil. Un mes después, a unas semanas de los comicios el PAN denunció que había encontrado credenciales ilegales, canceladas, que habían sido usadas para votar en las elecciones federales en Ocotlán.<sup>2</sup> El PAN anunció que tenía un dispotivio para obstaculizar este tipo de maniobras. El PAN también entregó como evidencia de las fallas del empadronamiento credenciales sin firma ni huella que estaban siendo repartidas. Por esta denuncia el RFE cesó a un visitador domiciliario.

Las cifras de empadronamiento arrojaban que había 211 mil 020 electores más que en agosto de 1991. Ante el Consejo Estatal Electoral el RFE informó que tenían credencial 2 millones 443 mil 313 jaliscienses, y que no habían sido recogidas 50 mil 339 credenciales. Así, el porcentaje de ciudadanos en edad de sufragar que contaban con credencial había ascendido a un 97%. Los partidos opositores se quejaron de un fuerte rasurado de electores, sobre todo en los lugares en donde la oposición tenía visos de triunfar. El PAN calculaba que un 20% de ciudadanos en edad de votar estaba fuera del padrón. Había un 17.5% de ciudadanos estimados que no podrían ejercer su derecho al voto según las cifras oficiales. En los distritos primero y vigésimo se encontraba en esta situación una cuarta parte de los ciudadanos, en el sexto más de la quinta parte y en el tercero, decimotercero y decimo séptimo esta proporción alcanzaba a la quinta parte.

#### EL CONTRASTE DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA

El PAN intentó introducir algunas modificaciones a la nueva ley electoral que la pusiera al menos al tono del Cofipe, pero todo el esfuerzo parlamentario panista no fructificó. A la ley original enviada por el gobernador el PRI le introdujo modificaciones secundarias. El control de los comicios, la figura de los auxiliares electorales, acusados de ser los perpetradores del fraude, y los obstáculos a las coaliciones persistieron. El PAN consideró que la nueva ley legalizaba el

<sup>2</sup> Dichas credenciales canceladas tenían la perforación que se les hace al haber votado.

fraude. En esta forma se iba a las elecciones locales con una legislación sin consenso.

El diputado panista José Manuel Verdín denunció que en el PRI había venta de candidaturas. Esto calentó el inicio de las campañas. El PRI, por su parte, se ofendió y amenazó con una demanda penal por calumnia. A su vez, el secretario de la CROC desdenó a la oposición y dijo que no tenía con qué dar la pelea al PRI. El partido del Estado inició sus campañas haciendo un llamado a la unidad. En colonias de clase media alta en su campaña el PRI ofrecía productos baratos en camionetas. En los barrios populares usaba al Pronasol. El candidato a la alcaldía de Guadalajara, muy ligado al gobernador, hizo una campaña de derroche. Algunos opinaban que parecía más bien una campaña para presidente de la República y no para alcalde. Inmensos carteles con su figura de pie y dando la mano invitaban a votar por el PRI. Propagandizó el lema "Guadalajara tiene la palabra". Obligó a integrantes de cámaras patronales a comprar boletos de elevados precios para rifas de automóviles. Fue patente el uso y abuso de recursos públicos en dicha campaña.

El candidato priista por Guadalajara envió una encuesta en la que se hacían preguntas acerca de apoyos para mejorar viviendas, clasificación de basura, mejoramiento de la seguridad pública, uso de agua, problemas de tránsito, sida, abasto, preservación del centro de la ciudad... El 20 de enero fueron dados a conocer los resultados de estas encuestas, según los cuales un 87% estaba dispuesto a clasificar la basura, un 84% se pronunciaba a favor del rescate de monumentos arquitectónicos e históricos, igual proporción opinaba que el sida requería mayor información, un 87% pedía que se regulara con mayor severidad sobre los lotes baldíos y un 71% pedía policías mejor entrenados y equipados. La intensidad y cantidad de la campaña priista opacó a todas las demás en Guadalajara. Los demás candidatos del tricolor además de grandes carteles y bardas siguieron utilizando el reparto y envió de trípticos a domicilios de empadronados, en los que se resaltaba el currículum de los candidatos.

El PRI de Zapopan impugnó al candidato panista alegando que no había presentado su renuncia a una representación distrital ante el Consejo Electoral con 90 días de anticipación, como lo marcaba la ley. El panista adujo constancias de tal renuncia y denunció que el PRI acudía a tal clase de jugadas porque veía difícil la contienda. A su vez el candidato del PRI en Tamazula criticó una supuesta alianza

entre el PRD y el clero. En Tepatitlán, municipio gobernado por panistas, el PRI decía que tenía mayores simpatías en ese municipio según una encuesta que había levantado.

El presidente de la República apoyó la campaña priista. Dos semanas antes de los comicios estuvo dos días en la entidad inaugurando obras. Anunció que se enviarían a Jalisco 202 mil millones de pesos para Pronasol. Previamente a las elecciones, el gobernador declaró que las acciones del ejecutivo federal no tenían signo partidista.

El candidato tricolor a la alcaldía tapatía culminó su preparación a la alcaldía con un acto a tono con su ostentosa campaña. Dau ofreció limpieza y seguridad para la ciudad. El dirigente del PRI en Jalisco recordó que las obras del presidente de la República y del gobernador apoyaban el triunfo de su partido. No obstante, la lluvias de enero habían dejado grandes baches en todas las calles de Guadalajara, lo cual ocasionaba malestar.

Al finalizar la campaña, precisamente por los conflictos suscitados la dirigencia priista consideró que era posible la derrota tricolor en 20 municipios, entre los que se nombró a Ciudad Guzmán, Chapala, Zacoalco, Jalostotlán y Tala. Algunos priistas inconformes aclararon que ellos no estaban propiamente con la oposición sino contra los cacicazgos que avalaba la dirección de su partido.

El PAN prosiguió con su lema "Estamos en Acción". Sus candidatos utilizaron los trípticos con currícula y lemas: "tenemos problemas comunes, busquemos soluciones juntos..." A principios de año el candidato panista por la presidencia municipal de Guadalajara acusó al ayuntamiento de destruir su propaganda, criticó la campaña priista por insultante a la pobreza de muchísimos tapatíos y resaltó que la encuesta del PRI no tocaba puntos fundamentales como el transporte urbano, la verificación vehicular y la contaminación. Un comentario generalizado acerca de la encuesta fue que problemas básicos habían sido eludidos. Las proporciones manejadas reflejaban una opinión que no correspondía a las necesidades de la mayoría de los tapatíos. Se insistió en que el dinero público se estaba destinando a gastos innecesarios. Los panistas también atacaron como inútil y costosa la verificación de vehículos. Ésta era llevada a cabo por un monopolio ligado a los gobernantes jaliscienses.

El PAN se opuso a la construcción de la obra hidráulica El purgatorio, aduciendo que hipotecaba a las futuras generaciones de tapatíos, dado que en vez de que el agua se con-



dujera por gravedad implicaba un costo excesivo en el bombeo. Tanto en lo concerniente a esta obra como en lo relativo a la verificación vehicular, los panistas acusaban que no se habían puesto a concurso. Se argüía que había intransigencia al imponer un proyecto con el que diversos grupos empresariales habían estado en desacuerdo. En cuanto a la línea dos del tren ligero, los panistas se preguntaban si se habían analizado otras alternativas técnicas y económicas. La sociedad tampoco sabía si se efectuó un concurso para su realización. También el PAN impugnó al candidato priista por Guadalajara por el hecho de que violaba la ley electoral del estado al hacer proselitismo en escuelas públicas. En la campaña panista por la alcaldía de Guadalajara, el primer punto que se proponía era el de la seguridad pública. Se criticaba la inseguridad de la ciudad. Denunciaba que el problema de la contaminación ambiental se estaba agravando sin que las autoridades realizaran acciones efectivas. El PAN propuso incrementar índices de seguridad y dignidad.

El PAN centró su campaña en la radio. El blanquiazul, a finales de enero de 1992 señaló que se aprestaba a medidas de resistencia civil dado que el proceso estaba resultando ser de los más parciales de cuantos se habían registrado en el estado. Por esos días el Tribunal Contencioso Electoral había desechado una inconformidad panista en contra del consejo electoral: el PAN había protestado por ventajas del PRI en la integración de los escrutadores de casilla. En febrero la campaña panista fue apoyada por la presencia del combativo líder guanajuatense del albiceleste, Vicente Fox. El PAN anunció que estaba seguro al menos del triunfo en 20 municipios y prometió luchar por el rescate del municipio libre y por acabar con la inmundicia política en Jalisco. El líder nacional, Luis H. Álvarez acudió al cierre de campaña del PAN en Jalisco. Álvarez demandó que las posiciones políticas se definieran en los procesos políticos, de acuerdo con los votos y no fuera de las urnas. Siendo las jaliscienses las primeras elecciones de 1992 serían un claro indicador de cuál iba a ser el comportamiento del gobierno y de los partidos en los comicios de ese año. El dirigente panista expresó serias dudas en cuanto al respeto de la voluntad ciudadana, pero alentó a arrebatar espacios al gobierno. Álvarez se refirió a la deficiencia del padrón y a la entrega selectiva de credenciales. Denunció que en Totatiche y en Arandas se descubrió que en vehículos oficiales se repartían credenciales de elector sin control alguno a los priistas locales. El

candidato a alcalde en Guadalajara por el PAN declaró que Jalisco sería el cementerio de los dinosaurios. Denunció la falta de modernidad de los gobernantes de Jalisco. La dirigencia nacional del PAN aseguró que emprendería fuertes acciones poselectorales si había fraude en Jalisco. El PAN criticó que el gobierno en Jalisco no se había significado por obras en beneficio del ciudadano y si por sus decisiones autoritarias. Un punto en contra del PRI eran los cacicazgos locales.

El PRD organizó algunos foros. Las campañas las hicieron los grupos perredistas cada uno por su cuenta. Hubo algunos que destacaron en sus bardas el nombre de un candidato a diputado plurinominal suplente. Los que habían estado en contra de la candidatura de Joel Robles no la apoyaron en la campaña. La penúltima semana de enero el PRD aseguró que se fraguaba fraude en El Salto. Se señaló la existencia de un padrón impreciso y amañado, entrega selectiva de credenciales, y el diseño del llamado "ratón loco" (que los ciudadanos no se encuentren en las casillas donde se supone deberían de estar y que empiecen a buscarse en las casillas cercanas). En el agro el PRD centró su campaña en contra de los candidatos impopulares, destacando que la reforma al artículo 27 constitucional representaba un engaño para los campesinos, puesto que redundaría en beneficio de los empresarios. A finales de enero Cuauhtémoc Cárdenas apoyó la campaña perredista con una visita a Cihuatlán, Tomatlán, Villa Purificación, El Limón y Ciudad Guzmán. También acudió a Tamazula, Tuxpan, Zapotitlán, Zacoalco de Torres, Guadalajara y Zapopan. El dirigente nacional del PRD previó una alta votación para su partido en Jalisco. Anunció que el PRD estaba comprometido en una lucha en contra de las reformas al artículo 27 que pretendían despojar a millones de campesinos de sus tierras. Cárdenas estuvo en el cierre de campaña perredista en Guadalajara. También estuvo en ese acto el senador del PRD Porfirio Muñoz Ledo quien propuso acabar con una especie en extinción denominada "Cosío-saurio", inmune a la modernidad, que cavaba su tumba y la de su partido. El PRD esperaba el triunfo en Cihuatlán, Zacoalco, Zapotitlic y Tala.

El PFCRN aludía en su campaña a la verificación vehicular como un abuso. El PMS, sin registro, lanzó la campaña de Alvaro Ramírez Ladewig como candidato a la alcaldía de Guadalajara. Éste criticó tanto al gobierno como a la administración de la Universidad de Guadalajara.

## LAS CAMPAÑAS DE LAS ENCUESTAS

A finales de enero, la misma empresa que había realizado la encuesta publicada en *El Occidental* antes de las elecciones de agosto, volvió a la carga por el mismo medio con una nueva encuesta en la que se decía que la población estaba motivada para votar, y que en toda la zona metropolitana predominaba el nombre del candidato priista por Guadalajara, pues resultó ser el más conocido en los municipios conurbados.<sup>3</sup> Los otros candidatos priistas aclararon que Dau colaboraba con su propaganda a sus causas. En lo concerniente al partido que despertaba más confianza, la encuesta arrojaba que en Guadalajara el PRI obtenía el 58% y el PAN el 18%. El PRD se quedaba en un lejano tercer sitio con 2.1%. En Zapopan el tricolor lograba el 45.8 y el PAN 32.8% de la confianza de los encuestados. En Tlaquepaque el PRI se alzaba con el 58.8%, mientras el PAN conseguía el 7.9%.<sup>4</sup> Finalmente, dicha encuesta arrojaba un gran optimismo para el tricolor. Los que creían que el voto se respetaría alcanzaban una mayoría de 59.4%, aunque los desconfiados todavía mostraban un alto porcentaje: 36.8%. La mitad de los que dijeron que no votarían adujeron no contar con la credencial.

## ELECCIONES IMPUGNADAS

El presidente del Consejo Estatal Electoral prometió elecciones tranquilas y limpias. El día de las elecciones se

<sup>3</sup> En el municipio de Guadalajara, en la zona metropolitana fue aplicada una encuesta en la que se preguntaba si conocían los nombres de los diversos candidatos, un 49.9% de los encuestados dijo conocer a Dau, candidato por el PRI, mientras sólo un 2.2% reconoció el nombre de Bacza, candidato panista. En el municipio de Zapopan, los encuestados conocían en un 39.3% al candidato priista Dau, quien contendía por Guadalajara y sólo un 26.3% al candidato del PRI por Zapopan. En Tlaquepaque, Dau era reconocido por un 27.5%, mientras el candidato del PRI a la alcaldía de ese municipio sólo llegaba a un 3.3%.

<sup>4</sup> La encuesta quedó lejana respecto a las cifras oficiales, pues aunque le dio más de un punto al PRI en Guadalajara y le quitó más de un punto al PRD, quedó 17 puntos porcentuales por abajo en lo que al PAN se refiere. En Zapopan la encuesta no acertó, pues el PRI consiguió más de once puntos y el PAN cinco. En Tlaquepaque en cuanto al PRI, la encuesta se quedó con más de tres puntos arriba y con más de diez puntos por abajo en la votación panista.

tendrían que instalar 5 mil 155 casillas (3 mil 120 básicas, 731 contiguas y 304 extraordinarias). En ciudades habría 3 mil 668, y el resto en el agro. En las cifras dadas por el CEE se preveían 20 mil 620 funcionarios electorales, 16 mil 839 representantes de partidos en casillas, 9 mil 085 comunes y mil 471 generales. Se declaró que las elecciones le costarían al gobierno estatal 12 mil 500 millones de pesos.

El PDM no participó en esta ocasión por falta de registro. Algunos de sus correligionarios decidieron votar en blanco con las letras RE que significaban reforma electoral a fondo. La información que tuvieron del resultado de su iniciativa fue que 300 así lo habían hecho en San Juan. También una cantidad de pedemistas había seguido la consigna en Puerto Vallarta. No obstante, muchos del gallito votaron por los panistas.

Las elecciones del 9 de febrero fueron calificadas de inmediato como poco concurridas, a excepción de los lugares en donde los partidos opositores disputaron fuertemente las alcaldías. Muchos funcionarios de casilla no se presentaron a cumplir con su deber. Entre las anomalías que se consiguieron en la zona metropolitana estaban la de que había casillas con más votantes que empadronados. Se dio el caso de proselitismo a favor del partido oficial. Hubo representantes de partidos opositores a los que se les impidió el desempeño de su vigilancia electoral. Vehículos oficiales fueron usados el día de las elecciones en favor de labores del PRI. No pocas casillas fueron instaladas con retraso. Hubo quejas en cuanto a que funcionarios electorales inducían el voto en favor del PRI. El PAN y el PRD calificaron como muy viciada la jornada electoral, mientras el PRI recalco que había sido pacífica y sin contratiempos. El PAN denunció carruseles de votantes, intimidación y expulsión de representantes de casilla, falta de materiales y votación sin credencial de elector.

El PAN señaló al candidato priista por Zapopan como responsable de haber controlado la elección y de haber instrumentado un operativo denominado "fiesta" por el cual se había organizado el fraude. De tal operativo el PAN adujo que tenía grabaciones de órdenes dadas a través de radio. Se denunciaba que había contubernio entre priistas y las autoridades electorales. Se dio el caso de muchas casillas con más votos que empadronados. En Puerto Vallarta la principal queja versó sobre credenciales utilizadas sin que tuvieran, como marca la ley, domicilio inscrito. En ese sitio

hubo alrededor de 6 mil credenciales en las que en lugar del domicilio se señalaba domicilio conocido, lo cual resultaba altamente sospechoso. También hubo 577 dobles credenciales y fueron utilizados en la campaña del PRI recursos públicos. Los panistas insistieron en que priistas habían distribuido credenciales de elector sin huella ni firma. El PAN se quejó de que los funcionarios electorales habían sido totalmente parciales. Que los que no fueron considerados incondicionales habían sido cambiados. Así, más que en otras ocasiones se habían dado casos de cambio de funcionarios de casilla. Los auxiliares electorales habían dirigido el proceso y los actos fraudulentos. En cuanto a credenciales los panistas indicaron que se habían dado sobreimpresión por una parte y retención por otra. Fuera del tiempo legal se habían repartido credenciales a gente del PRI. Hubo brigadas volantes que utilizaron credenciales no entregadas a ciudadanos. En una delegación municipal de Tepatitlán se habían localizado 35 credenciales sin huella ni firma, cuando supuestamente este tipo de credenciales no entregadas deberían estar en resguardo en el RNE. El PAN adujo también que la lista adicional fue usada para abultar la votación.

En Cihuatlán los perredistas denunciaron obstrucción de votación, que el voto no fue secreto, que se habían repartido credenciales a menores de edad, estudiantes, con el señuelo de que al votar por el PRI tendrían buenas calificaciones. Hubo acarreo de votantes, "tacos" y el partido oficial había realizado actos de propaganda el mismo día de las elecciones. En ese municipio costero hubo alianza CNC-PRD. El presidente del comisariado ejidal de San Patricio se quejó de maniobras ilegales para destituirlo de su cargo. La diferencia en las cifras oficiales entre PRI y PRD fue de 232 votos... Hubo muchos anulados porque no estaban bien tachados, la mayoría por el PRD. En El Salto el partido del sol azteca dispuso un operativo de vigilancia. El partido opositor con más votos fue el PAN. El día de la elección no hubo mayor problema. Este se dio antes en el padrón y en las credenciales.

Los observadores de la Academia Jalisciense de Derechos Humanos, que en esta ocasión se habían concentrado en el sur y en la costa entregaron reportes de los cuales se desprende que un 65% de las casillas observadas no había iniciado a tiempo, en un 21% no se podía votar sin ser observado, en un 10% se percataron de que había carruseles, en un 18.6% hubo casos de ciudadanos que votaron sin estar

inscritos en el padrón, y en la cuarta parte de las casillas hubo quejas por irregularidades.<sup>5</sup>

#### LAS ELECCIONES SEGÚN LAS CIFRAS OFICIALES

El PRI reconoció su derrota en 18 municipios. Quince a manos del PAN (Ciudad Guzmán, Chapala, Colotlán, Magdalena, San Juan de los Lagos, San Julián, Mascota, Santa María de los Ángeles, Juanacatlán, Arandas, Zapotlanejo, Purificación, Unión de San Antonio, Acatic y Gómez Farías). Dos del PARM (Tuxcueca y Teuchitlán) y uno del PRD (Cuquío).

En la elección para diputados de mayoría el PRI alcanzó 757 mil 384 votos para un 59.2% de la votación; el PAN 400 mil 936 para 31.3%; el PRD 55 mil 845 para 4.3%; el PFCRN 35 mil 520 para 2.7%; el PARM 14 mil 858 para 1.1; y el PPS 13 mil 749 para 1%. Hubo 39 mil 977 votos nulos. Los partidos de oposición se quejaron que éstos abundaron en casillas no vigiladas. Tenían la sospecha de que votos opositores hubieran sido anulados ilegalmente. Ese 3% de los votos totales anulados equivalía a una cantidad de sufragios mayor que la alcanzada por el PFCRN, el PPS y el PARM. En la elección para presidente municipal en Guadalajara hubo más de 2 mil votos de más que para la de diputados, situación que no concordaba con una dinámica apegada a las normas electorales.

En cuanto a votaciones locales, el PAN va en ascenso tanto en números absolutos como relativos de 1985 a la fecha: ha duplicado su votación y ha incrementado en once puntos su porcentaje. El partido del Estado aumentó en votos absolutos, pero disminuyó su porcentaje en tres puntos. El PAN tiene su votación más reñida en el primero y la más abultada en el XX. La más alta votación perredista se encuentra en el XIX. El PAN mejoró su votación con respecto a las votaciones federales del año anterior en once distritos, sobre todo en los distritos V, VI y VII. Mientras en la capital

<sup>5</sup> La Academia había optado por no impulsar la observación electoral en los comicios locales de 1992; pero muchos grupos se lo demandaron, y se organizaron grupos de observadores. En Ciudad Guzmán hubo 120, la mitad provenía de comunidades eclesiales de base y la otra parte de panistas. En Tamazula los observadores, 24, eran de comunidades de base. Se dio observación en Cocula, Ciudad Guzmán, Zapotitlic, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán, Cihuatlán, Tomatlán y Tamazula.

disminuye votos, en el resto del estado, sobre todo en distritos catalogados como rurales, los incrementa con fuerza. El PRI la incrementó sólo en dos: el XV y el VII. En el primero de éstos con un 87% más de votación. La mayor pérdida de votos priistas se ubicó en los distritos XX y VIII.

La votación oficial en Guadalajara dio para el PRI el 55.3% y para el PAN el 33.9%.<sup>6</sup> La abstención, teniendo en cuenta las cifras oficiales fue del 47.6%, pero si se tienen en cuenta los ciudadanos estimados la abstención sería del 56.7% en todo el estado. Pero esto en el XX sería del 65.4% y en el XVIII del 62.2%. Fue mayor que la federal de unos meses antes, pero bastante menor que la local anterior que se había colocado en un 70%. Las votaciones de que se ufano el partido del Estado en el distrito VII fueron mayores que las federales de 1991. Según las cifras manejadas por el PRI éste tenía mayores votaciones en todos los municipios. No obstante perdió los municipios de Arandas y San Julián en ese distrito.<sup>7</sup>

En cuanto a los municipios ganados por la oposición en 1992, teniendo en cuenta las cifras electorales oficiales en esa elección como en los comicios locales de 1988 y en los federales de 1991 se aprecia lo siguiente: en nueve de ellos (Acatic, Arandas, Chapala, Colotlán, Magdalena, Mascota, Santa María de los Ángeles, Unión de San Antonio y Zapotlanejo) se ha dado una contienda fuerte entre el PAN y el PRI. En todos ellos, a excepción de Santa María de los Ángeles, el partido del Estado bajó su votación respecto a lo obtenido en 1991, pero subió en relación con sus votos de elecciones locales de tres años atrás. Exceptuando otra vez Santa María de los Ángeles y Arandas, el PAN fue subiendo sus votos en cada elección. En ambos casos el blanquiazul tuvo un descenso en las elecciones federales, pero incrementó mucho sus vo-

<sup>6</sup> En la revista *Proceso* del 17 de febrero de 1992 se calculaba que en dispendiosa campaña el candidato por el PRI a la presidencia de Guadalajara había gastado unos 35 mil millones, por lo que cada sufragio le habría costado arriba de 150 mil pesos. El PAN arguyó que al blanquiazul cada voto tapatío le había salido en 400 pesos. Posteriormente el priista Dau hizo una aclaración pública según la cual sólo había gastado 7 mil 630 pesos en su campaña, de los cuales 4 mil 830 habían salido de rifas y el resto de simpatizantes. Tal cantidad no convenía a quienes criticaban lo dispendioso de la campaña priista en la capital del estado.

<sup>7</sup> En este distrito se dio la fuerte impugnación por el caso de Tepatitlán. Había evidencias de operativos fraudulentos, pero las mismas cifras levantaban sospechas pues si ya se había denunciado inflación de votos en las elecciones federales de 1991, el que los índices se hubiesen incrementado no correspondía al comportamiento ordinario de afluencia de votantes.

tos en las locales de 1992. En San Juan de los Lagos, Juana-catlán y San Julián aumentó la presencia del PAN y del PDM frente al PRI. En el primero y el tercero el partido del Estado incrementó de vez en vez sus votos, mientras el segundo sufrió un severo retroceso en 1992. El PAN tuvo un fuerte incremento en el primero y segundo; en el tercero había sufrido un descenso en 1991. En Gómez Farías y Ciudad Guzmán se había presentado una situación de pluripartidismo con predominio priista. El partido del estado subió sus votos en elecciones locales, pero descendió respecto a las federales. En el primero el PAN brincó de 27 votos a mil 304. En el segundo se conjuntó la oposición bajo el PAN, con lo que este partido pasó de 4 mil 972 votos en diciembre de 1988 a 8 mil 421 en agosto de 1991 hasta 14 mil 313 en 1992. Conjuntado esto último con el descabro del tricolor se configuró el triunfo albiceleste. Finalmente en Villa Purificación el PRI fue bajando en sus porcentajes. Mientras el PAN de tener cero votos en diciembre de 1988, y de haber quedado muy lejos del PRD en agosto de 1991, se levantó con el triunfo en 1992. En Teuchitlán el PRI mejoró su votación local, pero bajó mucho con respecto a la federal. El PARM bajó bastante sus votos en la federal, pero triunfó en la local. A su vez, en Tuxcueca el PARM había descendido en la federal por debajo del porcentaje del PFCRN; pero en 1992 consiguió la victoria. En Cuquío el PRI, habiendo elevado sus votos en las elecciones federales, decayó en las locales. No obstante, su votación fue mejor que la de diciembre de 1988. Por su parte el PRD casi eleva en nueve sus votos de agosto de 1991.

El PAN, además de los municipios que le fueron reconocidos según las cifras oficiales disputó con fuerza 34 municipios, entre los que destacaban los de los Altos y los del norte. El PRD tuvo una alta votación en 13 municipios.<sup>8</sup> El PFCRN alcanzó una votación buena en siete municipios. El PARM tuvo votaciones importantes en los dos municipios que ganó. El PPS sólo ostentó una votación alta en el municipio de Atemajac. Entre los municipios perdidos, el PRI subió su votación absoluta en 15 y bajó en tres.

La comparación de porcentajes entre PAN y PRI dan una batalla estrecha en el I distrito, una cercanía en el XIII y XIV. Fuera del XIX los más altos porcentajes se dividen entre

<sup>8</sup> Aparte de los ya enunciados están: Tomatlán con mil 240 por el PRD y 2 mil 755 por el PRI; A. Escobedo, 814 PRD, y mil 168 PRI; Tecatitlán mil 589 PRD, 2 mil 842 PRI.

los dos partidos. El PRD tiene el 18% en el XIX, con lo que duplica la proporción panista. En el XI el PRD alcanza 11% y el PFCRN llega al 12%. El PAN mejoró en más del 10% su votación de 1991, y subió su proporción en la consecución de votos en 7.6%; el PRI perdió un 21% de su votación, y bajó casi cuatro puntos en su porcentaje. El PRD mejoró su votación en 35%, y subió en 1.6 puntos su porcentaje; el PFCRN perdió una cuarta parte de sus votos y medio punto porcentual.

El domingo 16 de febrero el Consejo Electoral del Estado dio a conocer las cifras oficiales por las cuales se reconocía solamente el triunfo de la oposición en 18 municipios. Según esas cifras habría 133 regidores plurinominales en 110 ayuntamientos de los cuales el PAN contaría con 81, el PRD con 19, el PRI con 18, el PFCRN con 12, el PPS con tres. El PARM no tendría este tipo de regidores.

#### LAS POSTURAS PARTIDARIAS

El PRI se ufano de haber ganado en los 20 distritos, y de haber recuperado las presidencias municipales de Tepatlán y Totatiche que habían sido panistas; las de Tala y Zacoalco que habían estado gobernadas por la izquierda. Pero anunció que impugnaría las elecciones en Arandas, Ciudad Guzmán, Santa María de los Ángeles, Zapotlanejo, San Juan de los Lagos, Chapala y Colotlán.

El comité ejecutivo estatal del PRI, a través de inserciones pagadas, agradeció a sus militantes y simpatizantes el apoyo. Un día después de que el Consejo Electoral anunciara los triunfos del PRI el ya reconocido diputado tricolor por el tercer distrito sacó desplegados en los que recapituló su campaña según los cuales había repartido harina y huevo; había ofrecido atención médica y había resuelto demandas a través de gestión. Su campaña no sólo había hecho pintas de bardas y propaganda en postes, sino que había puesto especial atención a la promoción de votos por medio de asociaciones civiles, uniones y una organización de 11 mil 500 promotores, de los cuales 11 mil 176 habían sido coordinadores de acera. El padrón priista que se dijo tenía ese distrito era de 19 mil 706, había redituado en más de 44 mil votos.

En la dirección estatal del PRI se reconoció que había preocupación por los resultados electorales. No los esperaban como se presentaron en esta ocasión.

Priistas inconformes evaluaron que las derrotas del PRI habían sido causadas por la mala selección de candidatos, muchos de ellos elegidos por ligas con el gobernador (y aun en contra de sugerencias o pedidos de otros funcionarios de alto rango en el gobierno federal).

El PAN, en anuncios pagados, celebró sus triunfos ya reconocidos y denunció las graves irregularidades y vicios en el proceso electoral. Declaró que impugnaría muchos municipios, entre los que estaban Puerto Vallarta, Sayula, Amatitlán, Acatlán de Juárez, Atemajac, Teocaltiche, Teocuitlán de Corona, Tala, Atoyac, Tomatlán, Totatiche y Tepatlán. Según los panistas, este proceso había sido más sucio que el del 18 de agosto. El PAN convocó a mítines de la victoria en donde le había sido reconocido el triunfo.

El PRD evaluó como una buena campaña la local de 1992. Aunque no había logrado volver a tener un regidor en la capital tapatía, sí había conseguido acceso a la cámara local y el reconocimiento de una victoria municipal. Anunció que impugnaría siete municipios en donde tenía claras pruebas del fraude: Cihuatlán, Poncitlán, Jamay, Antonio Escobedo, Cocula, Zapotiltic y Zacoalco de Torres. En este municipio un priista entregó a los perredistas 39 boletas que le habían entregado los del tricolor para inflar la votación.

El PFCRN se enfrascó en declaraciones en las que pretendía mostrar que no había perdido su tercer sitio electoral, aduciendo que en distritos en donde el PRD no había tenido candidato había recibido votos. Sin percibir el voto por partido que va más allá de candidatos a diputados, quería deducir que esos votos eran falsos. El PFCRN se quejó de que el gobernador no había cumplido con su palabra de elecciones limpias. Según ese partido se había cometido fraude en Zacoalco, Atoyac, Unión de Tula, Amacuecua, Techaluta y Tizapán el Alto. Demandó la disolución del aparato electoral que era el que servía de base al fraude.

El PRI con el 59% de los votos se quedó con el 70.5% de las diputaciones, el PAN con 31% alcanzó sólo 20.5% de las curules, y el PRD con 4.4% obtuvo el 5.8%, mientras el PFCRN con su 2.7% se colocó en el 2.9% de los puestos a ocupar por diputados.<sup>9</sup> Teniendo en cuenta los municipios reconocidos a la oposición, ésta sólo gobierna al 8% de los habitantes del

<sup>9</sup> Tres años atrás el partido del Estado con 55% de los votos se quedó con 24 curules, y el PAN con 27% consiguió 7. En 1992 los números de curules para estos partidos no variaron.

estado. Pero si se suman los municipios en donde la oposición levantó fuertes impugnaciones, en los municipios que la oposición disputa se encuentra el 42% de los jaliscienses.

#### LAS IMPUGNACIONES AL FRAUDE

El Consejo Electoral del Estado no cumplió con el requisito de entregar resultados la noche misma de las elecciones. Empezó a dar resultados parciales hasta cuatro días después de los comicios.

El Tribunal de lo Contencioso Electoral no resolvió ninguna de las 63 inconformidades que recibió. Todas las consideró improcedentes o infundadas, ya porque no había acreditación de quien las presentaba, ya porque no cubría las formas legales, o había sido entregada tarde. En concreto la inconformidad del PRD por la no asignación de la segunda curul plurinominal no la examinó, alegando falta de tiempo, y la turnó al Colegio Electoral. Así, esta instancia pasó sin resolver nada como una intermediación innecesaria entre las impugnaciones partidarias y el Colegio Electoral. Los integrantes del Tricoel se justificaron aduciendo imparcialidad y estricto apego a la normatividad. La Federación Nacional de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados había ofrecido asesorar a los partidos, los cuales no respondieron a tal ofrecimiento, por lo que dicha asociación les externó un reclamo. La oposición juzgó que al desestimar por completo los recursos de los partidos políticos, la mayoría de los cuales habían presentado en tiempo y forma, el tribunal había demostrado que no servía, y que hacía imperar lo formal sobre lo real. Los panistas también se inconformaron con el proceder de El Colegio Electoral en el caso del examen de las elecciones para diputados locales, y sentenció que esa autocalificación donde prevalecía el mayoriteo priista debía terminar. Se había mantenido la consigna de quedarse con todo y no había imperado la imparcialidad.

El Acuerdo para la Democracia, organismo independiente en el que hay militantes de todos los partidos (los priistas que están en ese organismo pertenecen al FAD) declaró dos días después de las elecciones que habían mejorado las elecciones pero que persistían vicios. Señalaron una mala organización e irregularidades debido a una legislación deficiente y mala fe, un elevado abstencionismo por falta de confianza en las autoridades, que en algunos municipios

la participación ciudadana había propiciado comicios competitivos. Voceros eclesiásticos señalaron que el abstencionismo se debía a la falta de democracia. El DHIAC, el 27 de febrero, demandó que el gobernador reconociera los triunfos de la oposición. La Academia Jalisciense de Derechos Humanos, en una conferencia de prensa, dio a conocer el dictamen con base en su observación: se había transgredido el derecho al voto en las elecciones del 9 de febrero.

El miércoles 12 de febrero la cúpula del PAN a nivel nacional se había reunido con el presidente de la República, y de su plática había salido la coincidencia de la necesidad de respetar leyes y votos. Los panistas declararon que el presidente les había indicado que no se volverían a cuestionar los resultados electorales en 1992.

Sin embargo, en Jalisco la oposición aducía que muchos resultados eran falsos y ficticios. En más del 40% de los municipios hubo quejas de la oposición. Solamente entre el PAN y el PRD los municipios impugnados sumaron 44.<sup>10</sup> El PRD insistía en que se limpiaran las elecciones jaliscienses.

Las acciones de protesta no se dejaron esperar. La efervescencia en varios municipios empezó a manifestarse los días siguientes a los comicios. Militantes de partidos de oposición realizaron plantones fuera de los comités electorales en varios municipios. Se anunció que habría resistencia civil por parte de los panistas, la nulidad en los distritos XIV, XVII, XVIII y XX. El PAN impugnaba también el primer distrito en donde según las cifras oficiales el tricolor había ganado por sólo 105 votos. El PAN instaló un plantón frente al Congreso para exigir del Colegio Electoral el reconocimiento del triunfo en el primer distrito. Había apenas 105 votos de diferencia. En el primer distrito el PAN por equivocación entregó las fotocopias y se quedó con los originales, lo que dio pie al Tribunal para no examinar el caso. El PAN acusó a las autoridades electorales de ser cómplices del PRI. Aclaró ese partido que se había dado un error procesal agravado por error o mala fe de la oficialía de partes del Tricoel. Posteriormente prolongó este plantón demandando que en algunos municipios se anularan algunas casillas en las que había evidencias del fraude, con lo que el PAN podría ganar los municipios de Totatiche, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires e Ixtlahuacán del Río. Exigía, dado que el fraude se había realiza-

<sup>10</sup> El PAN declaró que estaba inconforme con los resultados en 24 localidades y el PRD en 20.

do en más del 20% de las casillas, proceder a la anulación de las elecciones en Puerto Vallarta, Zapopan, Tala, Sayula y Acatlán. En Tepatitlán el reclamo era que toda la elección fuera anulada. El PAN también demandaba justicia electoral en Hostotipaquillo, Teocaltiche, Huejúcar y Villa Guerrero, donde se tenía la intención de no aceptar la imposición de los priistas.

En la celebración de los 450 años de la fundación de Guadalajara, miles de panistas jaliscienses se sumaron al acto para, en una marcha silenciosa, protestar por los fraudes. Demandaban el reconocimiento de su triunfo en el primer distrito y denunciaron las irregularidades electorales. El PRD apoyó esa marcha. En Tala fue tomada la comisión electoral por militantes del PAN y del PRD demandando el reconocimiento del triunfo de la planilla opositora. Aducían que el PRI ilegalmente había repartido 2 mil credenciales para alterar la votación y que el partido del Estado se había fincado en la acción de los auxiliares electorales. Panistas de Tala y Zapopan declararon tener pruebas de los fraudes. Entre ellas 16 cartuchos grabados del operativo "Fiesta". En las cintas grabadas se mostraba que las autoridades electorales trabajaban en coordinación con los candidatos del PRI. Hubo abultamiento de electores ficticios. Otras pruebas se referían a credenciales de gente que no estaba en la localidad y que en los listados aparecía como si hubiera votado.<sup>11</sup> El PRI respondió acusando al PAN de incitar a la violencia. Calificó el hecho de que el PAN tuviera esas grabaciones como delito porque había interferido en vías de comunicación, y había practicado espionaje. En Tala el pueblo estaba indignado. Presentaron a la prensa sus pruebas del fraude (solicitudes de credenciales que no se entregaron y cuyos propietarios aparecieron como votantes, boletas de más al final del cómputo, etc.). La coalición opositora de Tala hizo una marcha de protesta hasta palacio de gobierno. A finales de febrero iniciaron un plantón demandando que el gobernador los recibiera.

Los panistas de Puerto Vallarta salieron a las calles en una marcha silenciosa. Posteriormente realizaron otras manifestaciones públicas de protesta.<sup>12</sup> En Sayula había ame-

<sup>11</sup> En Tala al PAN se le reconocían 5 mil 426 votos, y al PRI 7 mil 258; en Zapopan el PRI tenía oficialmente 78 mil 722 votos y el PAN 51 mil 168.

<sup>12</sup> En este puerto el PRI tenía oficialmente 12 mil 189 votos, y el PAN 9 mil 848.

nazas de tomar el palacio municipal. En Teocaltiche se probó que hubo boletas en demasía.<sup>13</sup> Los panistas de Acatlán realizaron un plantón ante el palacio de gobierno protestando por el fraude y exigiendo nuevos comicios.<sup>14</sup> Varios cientos de vecinos de Acatlán denunciaron que el priista, quien había sido reconocido por las instancias electorales como presidente municipal, además de haber cometido fraude en la elección lo había hecho con tierras ejidales. Amenazaron con tomar el palacio municipal y no dejar gobernar al impuesto. También frente al palacio de gobierno se presentaron demandantes en contra del fraude en El Salto.<sup>15</sup>

Los candidatos albicelestes de Zapopan y de Mazamitla lograron ser recibidos por el gobernador. Pero no lograron con esas entrevistas solución a sus demandas. Los panistas amagaron con organizar resistencia civil y tomas de presidencias.<sup>16</sup> En Tepatitlán los panistas calificaron las elecciones como un fraude horrorizante e insistieron en la anulación de los comicios.<sup>17</sup> Desde esta ciudad alteña panistas de la región iniciaron a principios de marzo una marcha hacia la ciudad de México en protesta por los fraudes en el estado de Jalisco. La dirección nacional del PAN apoyó la marcha de los panistas jaliscienses, y aclaró que este tipo de acciones han sido importantes para el reconocimiento gubernamental de la voluntad popular. El PRI trató de desvirtuar esta marcha aduciendo que no iban más de seis decenas de panistas. El PAN adujo que un acto de esta naturaleza, así lo hiciera uno debía ser atendido. Los panistas alteños al llegar al Bajío recibieron el apoyo de los panistas de Guanajuato. Fox estuvo en varios de sus mítines por las ciudades en las que fue pasando. En Querétaro, aprovechando que Cosío tenía que acudir a una reunión de varios gobernadores que examinaban el problema de Chapala tuvieron una breve entrevista con él en donde le presentaron pruebas de los fraudes. Los panistas entre otras evidencias tenían videograbaciones. En

<sup>13</sup> Aquí el PRI se levantaba con 3 mil 847 por 2 mil 813 del PAN.

<sup>14</sup> En este municipio donde gran parte de la sociedad optó por votar por el PAN se le reconocían 2 mil 171 votos, mientras al PRI 3 mil 170.

<sup>15</sup> En ese sitio industrial el PRI argüía 5 mil 900 votos en contra de 3 mil 758 del PAN y 638 del PRD.

<sup>16</sup> En Mazamitla al PAN se le daban por buenos mil 308 votos contra mil 577 del PRI.

<sup>17</sup> En esta localidad alteña que había sido gobernada por el blanquiazul las cifras oficiales arrojaban que el PAN había obtenido 11 mil 385 votos, mientras que el PRI 14 mil 165.

uno de los canales de televisión se había introducido la frecuencia de la dirección del operativo por parte del PRI. Lo que se suponía debía ser un secreto, llegó a muchos televisores de alteños. Algunos videograbaron el programa en el que entraba la voz del operativo. El gobernador indicó que estaba el Colegio Electoral en sesiones. Como no hubo arreglo, los marchistas decidieron proseguir a la capital de la República. Esta marcha fue denominada Marcha por la Dignidad de Jalisco. Insistió en su labor de hacer conciencia a su paso acerca de la limpieza electoral, y exigieron una amplia reforma en el sistema electoral para poder confiar en la participación electoral.

A finales de febrero un grupo de militantes del PFCRN inició una huelga de hambre frente al palacio de gobierno. Demandaron reconocimiento de su triunfo en Zacoalco,<sup>18</sup> Atoyac, Amacueca, Unión de Tula y Tizapán, y la anulación en Ixtlahuacán de los Membrillos, Ayutla y Jocotepec.<sup>19</sup> Demandaron los dirigentes estatales de este partido que se revisaran votos anulados<sup>20</sup> en Guadalajara y Zapopan y que se investigara tanto la integración del Consejo Electoral del Estado como la procedencia de los que habían fungido como auxiliares electorales. Algunos dirigentes de ese partido externaron que tenían la convicción de que en Guadalajara había ganado el PAN. Se quejaron de que el gobernador no había cumplido su promesa de limpieza electoral. Once días

<sup>18</sup> En este municipio al PRI se le asignaban 3 mil 654 votos, al PRD mil 894 y al PFCRN 2 mil 859.

<sup>19</sup> En Amacueca el PRI tuvo 922 votos, y el PFCRN 785; en Unión de Tula, 2 mil 376 el partido del Estado sobre mil 49 del PFCRN; en Tizapán el primero decía triunfar con 2 mil 658 sobre mil 706 del segundo; en Ayutla el partido del Estado ostentaba 2 mil 190, mientras el partido denominado ferrocarril 370; en Ixtlahuacán de los Membrillos el PAN tenía mil 538, el PRI 2 mil 145, y el ferrocarril 809; en Jocotepec al PAN se le reconocían 999, al PRI se le asignaban 5 mil 52, y al ferrocarril 674.

<sup>20</sup> La cuestión de los votos anulados daba material para la sospecha a todos los partidos. En Poncitlán más del 5% de los votos fueron anulados. En esta localidad en la que uno de los industriales fuertes, fabricante de dulces, Montes, no había sido beneficiado con la designación priista, pasó a su grupo a la campaña del PRD en el enfrentamiento con otro de los caciques del lugar. Las cifras oficiales arrojaron 6 mil 151 votos para el PRI y 3 mil 196 para el PRD. La gente de Montes captó una grabación de los grupos priistas que mostraban una íntima conexión entre las autoridades electorales, funcionarios de casilla y priistas. En Jalostotlán la diferencia entre el PRI y el PAN fue de 449 votos, y los votos anulados sumaron 249. En Tlaquepaque los votos anulados ocupaban el tercer lugar en la asignación de votos. Es decir resultó una cifra superior a lo que alcanzaron los partidos de oposición a excepción del PAN.

después levantaron su plantón y huelga de hambre aduciendo que habían negociado con el gobernador, quien se había comprometido a examinar con todo cuidado las peticiones del PFCRN.

El PRD demandó además del reconocimiento de Cihuatlán y Zapotiltic, la anulación de las elecciones en Poncitlán, Ocotlán,<sup>21</sup> Jamay,<sup>22</sup> Tamazula,<sup>23</sup> Tala, Tecalitlán,<sup>24</sup> Cocula,<sup>25</sup> Venustiano Carranza, El Limón, Tuxpan,<sup>26</sup> Pihuamo,<sup>27</sup> Casimiro Castillo y Manuel M. Diéguez. En este último municipio los perredistas argumentaron la violencia que había significado la quema de tres casillas, lo cual ameritaba la anulación de los comicios en ese sitio. Se quejaron también de la violencia electoral en Villa Purificación y en Atoyac.

Los perredistas realizaron marchas de protesta en Zapotiltic en las que participaron militantes de otros partidos opositores. En este lugar se denunciaba intimidación y brigadas de votantes volantes. El PRD también denunció inflación de votos en favor del tricolor en Ocotlán. En Ciudad Guzmán a quince días de la jornada electoral hubo una marcha por la democracia de los municipios. Se aprovechó que en esa ciudad se efectuaba el encuentro nacional de las comunidades eclesiales de base. En ese acto se acordó apoyar los perredistas de Cihuatlán. De este municipio, después de varias manifestaciones y marchas locales, partió otra a finales de febrero rumbo a la ciudad de Guadalajara en protesta por el fraude del lugar. Se sumaron las demandas de otras localidades. Fue denominada marcha por la democracia. Se reclamaba el reconocimiento del triunfo perredista en Cihuatlán<sup>28</sup> y en Zapotiltic.<sup>29</sup> Los marchistas (alrededor de 300) tomaron la ruta por donde pudieran manifestarse

<sup>21</sup> En Ocotlán mientras el PRI aducía 10 mil 636 votos, al PAN se le aceptaban 6 mil 38 y el PRD 2 mil 41.

<sup>22</sup> En Jamay el PRI argumentaba tener 2 mil 528 sufragios; al PAN le dejaban mil 839 y al PRD mil 222.

<sup>23</sup> En esta zona cañera el PRI presentaba 5 mil 809 votos y el PRD 3 mil 236.

<sup>24</sup> En Tecalitlán al PRI se le consignaban 2 mil 842 sufragios y al PRD mil 589.

<sup>25</sup> En Cocula el PAN tenía mil 98 votos, el PRI 3 mil 862 y el PRD mil 916.

<sup>26</sup> En Tuxpan los datos oficiales otorgaban al PRI 4 mil 222, y al PRD 2 mil 293.

<sup>27</sup> En Pihuamo el PRI presentaba 2 mil 796 votos y el PRD mil 249.

<sup>28</sup> Al PRI se le dieron 2 mil 920, mientras al PRD se le reconocían 2 mil 688.

<sup>29</sup> Aquí el PRI mostraba 3 mil 882 votos, y el PRD 2 mil 211.



ciudadanos de La Huerta, Casimiro Castillo,<sup>30</sup> Autlán,<sup>31</sup> El Grullo,<sup>32</sup> El Limón,<sup>33</sup> Venustiano Carranza,<sup>34</sup> Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Gómez Farías, Sayula,<sup>35</sup> Amacueca, Atoyac,<sup>36</sup> Zacoalco y Acatlán. Los integrantes de la marcha en que no sólo participaban hombres maduros sino también mujeres, ancianos y niños fueron realizando mítines en los lugares por donde pasaron. En muchos sitios la protesta era de ciudadanos que habían decidido sufragar por el PAN, pero que no se sentían identificados partidariamente sino opuestos a los candidatos del PRI y con una demanda cívica de respeto al voto. Así se unieron a la marcha de los perredistas de Cihuatlán los que protestaban por parte del PAN en Sayula y en Acatlán.<sup>37</sup> Habiéndose iniciado como marcha perredista, a lo largo de su caminata se fue volviendo en marcha ciudadana. Esta marcha fue apoyada en todo el recorrido por las poblaciones por donde pasó. A esta caminata por la democracia se le unió otra que partió de Ocotlán. Después de catorce días de peregrinaje desde la costa, pasando por el sur, llegaron los marchistas a Guadalajara. Los de la costa habían recorrido 400 kilómetros para expresar su inconformidad; los de la ciénaga 120 kilómetros. Realizaron un mitin en el centro de la ciudad, agradecieron el recibimiento de parte de los tapatíos. Al día siguiente tuvieron otro acto político enfrente de la sede del Congreso que fue presidido por Cuauhtémoc Cárdenas. El dirigente perredista hizo una crítica a la deficiente organización perredista en la entidad, lo que impedía que la protesta fuera más contundente. Aclaró que se tenían entrevistas con autoridades gubernamentales para defender triunfos. Que lo único que demandaba el PRD

<sup>30</sup> En este lugar al PRI le fueron reconocidos 2 mil 752 votos y al PRD mil 349.

<sup>31</sup> En Autlán el PRI se adjudicó 7 mil 587 votos sobre 3 mil 431 del PAN.

<sup>32</sup> En El Grullo el PRI tuvo 2 mil 972 votos y el PAN 2 mil 131.

<sup>33</sup> En este municipio al PRI se le reconocían mil 319 sufragios, y al PRD 859.

<sup>34</sup> En este sitio el PRI se levantaba con 2 mil 374 votos, y dejaba al PAN con mil 102.

<sup>35</sup> En Sayula el PAN tenía 3 mil 354 y el PRI 4 mil 589.

<sup>36</sup> En Atoyac el partido del Estado ostentó mil 564, el PRD mil 404 y el PFCRN mil 404.

<sup>37</sup> Una muestra de una demanda más ciudadana que partidaria lo muestra el hecho de que en Gómez Farías quienes ahora triunfaron por el PAN lo habían hecho hace seis años a través del PARM. En Villa Purificación el PAN no existía pocos meses antes de la elección. Los inconformes con el candidato oficial decidieron adoptar el registro panista.

era respeto a la ley, y que no exigía nada que no le correspondiera. No se negociarían los votos. Adelantó que no se querían consejos municipales ahí donde se había triunfado.

Los dirigentes de los caminantes desde Cihuatlán denunciaron que el fraude tenía que ver con el proyecto de la llamada Costa Alegre en donde el gobernador tenía intereses. Se señaló que había una alianza entre el gobierno del Estado y los tecos. Lo que escandalizaba a los campesinos de la costa era que dicha alianza se había extendido hasta límites que no se habían imaginado, pues maestros pertenecientes a la Universidad de Guadalajara se habían coludido con dicho fraude, habían presionado a menores a votar por el partido oficial y querían ejercer represalias en contra de los maestros que no se habían prestado a su juego. Los perredistas de Zacoalco aclararon que, a pesar de haber quedado en tercer lugar en la votación oficial, protestaban en contra del fraude. Indicaron que el municipio era un barril de pólvora por el conflicto electoral y se responsabilizó al gobernador de lo que pudiera pasar. Tanto en el mitin como posteriormente a través de desplegados, los perredistas presentaron las pruebas del fraude: el "taqueo" comprobable por 39 boletas tachadas por el PRI que tenían los perredistas porque un priista se las había hecho llegar; la intimidación y agresión física de parte de funcionarios electorales a representantes de partidos de oposición; la integración de la Comisión Municipal Electoral y de las Mesas Directivas de Casilla con familiares de los candidatos priistas.

Los marchistas se mostraron también contrarios a los cacicazgos, a las amenazas que habían recibido algunos sacerdotes por haberlos apoyado y se alegraron de haber visto el repudio que había en la zona costera y sureña del estado en contra del fraude. Realizaron una marcha por el centro de la ciudad y después se instalaron en plantón ante la sede del Congreso local. Anunciaron que se quedarían hasta el informe del gobernador, que sería a mediados de marzo.

Tanto el PAN como el PRD plantearon sus demandas al gobierno local y federal. El PAN anunció que estaba dispuesto a denunciar ante organismos de derechos humanos los fraudes. Ante las respuestas gubernamentales de que presentarían sus pruebas a las instancias electorales, aducían que no había confianza en ellas, por la parcialidad de tales instancias.

El PRI calificó las muestras de inconformidad ciudadana y partidaria como sensacionalistas. Llegaron a correr el

rumor de que se habían dado carruseles de votantes panistas en los Altos, pero no probaban esta acusación dado que el padrón y el aparato de las votaciones estaba en manos del partido del Estado. Se había corrido la voz que desde el PRI nacional se dio la orientación de que se reconocieran los triunfos claros a la oposición. Pero esto lo cumplieron a medias los dirigentes priistas de Jalisco, por lo cual la inconformidad había crecido. Los priistas amenazaban advirtiendo que en los sitios en donde a la oposición se le había reconocido el triunfo y en donde estaba protestando existían muchos priistas que también querían manifestarse. El comité del PRI de Cihuatlán sacó un desplegado en el que acusó al PRD de incitar a la violencia, denuncia a los que llama traidores por haberse pasado del PRI al PRD y declara que las elecciones se ganan con votos y no con marchas. El PRD volvió a exigir que se limpiara el proceso y el PAN enfatizó que no permitiría que le arrebataran sus triunfos.

Previamente a la presentación del informe del gobernador la situación jalisciense se encontraba muy caldeada y adversa al gobernante. Llegaba a esta fecha no con la fuerza plena, sino en medio de acusaciones en lo económico y lo político debilitando su posición.

A mediados de febrero en la revista *Proceso* el periodista tapatío Felipe Cobián denunció con nombres y cifras corrupción, nepotismo y negocios que estaban haciendo el gobernador y sus allegados. Dos puntos importantes en donde estaban situados algunos de estos negocios eran Puerto Vallarta y la costa sur del estado en donde había fuertes impugnaciones electorales. Esta revista fue rápidamente comprada por el gobierno del estado para que no circulara. Pero las fotocopias de este artículo circularon en oficinas, agrupaciones y mítines. Fue usado además como impugnación al informe del gobernador en la Cámara de Diputados de Jalisco.

El PAN adujo que Cosío no seguía la línea del presidente de la República, a lo que el gobernador replicó que sí lo hacía. En cuanto a las acusaciones de *Proceso*, después de haber permanecido callado un buen tiempo, cuando fue urdido a contestar se limitó a expresar que le tocaba al que acusaba probar lo que decía.

Al mismo tiempo que se multiplicaban las protestas electorales, organizaciones empresariales de Jalisco sacaron un desplegado a finales de febrero en el que se quejaban de los problemas de seguridad en la entidad. A principios de marzo con la participación de integrantes de la élite de Gua-

dalajara se realizó una marcha en contra del clima de inseguridad. La muerte de una joven a manos de un policía había rebasado el límite de la paciencia de estos sectores. Esta marcha en gran parte fue la expresión espontánea de ese descontento. Las señoras de la alta sociedad tapatía que llegaron a entrevistarse con el gobernador se encontraron con que éste no estaba en palacio. Lo que había sido una marcha silenciosa, se convirtió en voces de exigencia ante el poder político. Las señoras fueron recibidas por el secretario de gobierno quien las trató dura y amenazantemente. Se les pedían nombres para darles la cita con el gobernador otro día. Adujeron que si tenían miedo a los maleantes, también le temían al gobierno, y por eso no quisieron dar ningún nombre. No obstante al día siguiente, llegó a la casa de las más activas con nombre y dirección precisas el citatorio para entrevistarse con el gobernador. Al mismo tiempo algunos de los esposos de las quejas recibieron auditorías fiscales. El gobierno rechazó que se tratara de represalias, pero el temor cundió entre este sector de inconformes. Además el gobernador respondió a esta manifestación señalando que había manipuladores que querían desestabilizar. Al reclamo ciudadano lo veía como conspiración. En lugar de encaminarse contra el clima de inseguridad, se dirigía a intimidar ciudadanos. Aseguró que se investigaría para ver quiénes eran los instigadores de la marcha. El DHIAC aclaró que no era él quien la había organizado sino una sociedad inconforme y descontenta. Si anteriormente se habían levantado periódicamente rumores de que el gobernador se iría a un puesto en el gabinete salinista, ahora corría el rumor de que el gobernador se iba, pero a su casa. Los panistas consideraron que el gobernador podía caer si las presiones arreciaban. El diputado perredista declaró que el gobierno de Cosío padecía descrédito creciente. Previamente al informe Martínez Huitrón, Aranguren y Sandra López (importantes inversionistas en los rubros de hoteles, aceites y zapatos) se entrevistaron con el coordinador del gabinete salinista, Córdoba. Se filtró hasta el posible sucesor de Cosío: García Paniagua. Empezaba a fraguarse el convencimiento de que mientras la inconformidad crecía, el gobernador se disminuía. Cosío se vio en la necesidad de declarar que no se iría. Los problemas se entrelazaban, el social y el político.

Tanto el DHIAC como los empresarios habían apoyado a Cosío cuando llegó. Posteriormente se molestaron por la corrupción y porque el gobierno se estaba cerrando sólo a fa-

miliares de la élite gobernante y a sus protegidos. Antes del informe del gobernador se encontraban en la Plaza de la Liberación manifestaciones de panistas y perredistas. Los panistas estaban muy disgustados porque el Colegio Electoral no había resuelto en su favor, pese a las presiones del albiceleste, el caso del primer distrito. La dirección panista anunció que se tendrían que incrementar las movilizaciones puesto que no había voluntad para rectificar resultados. Cosío ya había logrado que los militantes del partido denominado popularmente ferrocarril levantaran su plantón, que estuvo coqueteando con unir sus reclamos a los del PAN. Se llegó a hablar de posibles acciones conjuntas entre PAN y PRD. Los perredistas prosiguieron el diálogo con la Secretaría de Gobernación en la ciudad de México. Antes de que Cosío presentara su informe lograron que les fuera concedida la segunda diputación plurinominal y la promesa de que en Cihuatlán habría un concejo municipal con priistas y perredistas. Esto mitigó la protesta de los perredistas. Los manifestantes de este partido se retiraron a otra de las plazas en donde de la protesta pasaron a celebrar su victoria por su cuenta, lejos de la plaza que podría ser escenario de confrontaciones con priistas.

Dirigentes del PAD criticaron la actitud ingenua de la izquierda que se contentaba con una curul y creía en las promesas de democratización. Días antes del informe el periódico *El Occidental* publicó los resultados de una encuesta realizada por VRYASA, la misma que había hecho las anteriores encuestas electorales de ese diario, según las cuales existía un enérgico reclamo al gobernador por la inseguridad pública, que era lo que se calificaba como la parte más negativa de la administración de Cosío. Además, la mayoría exigía que se hablara con la verdad.

El informe del gobernador, al que fue invitado el cardinal arzobispo de Guadalajara, se refirió a las obras realizadas en Jalisco con apoyo del gobierno federal, reconoció algunas fallas, aceptó que era explicable el sentimiento ciudadano respecto a la inseguridad, aunque estadísticamente Guadalajara se comportaba como cualquier ciudad de masas y culpó de ésta a bandas organizadas del ámbito federal. Aseguró que no tenía malas intenciones y prometió una nueva reforma electoral en la que se considerarían menores porcentajes para regidores de representación proporcional y la posibilidad de partidos estatales. Mientras tanto afuera del lugar donde rindió el informe, grupos de golpeadores a

suelo y de sindicatos del transporte afiliados a centrales oficiales trataban de impedir tanto la protesta panista como la de un grupo de ciudadanos que enrachados con la marcha en contra de la inseguridad reclamaban que la contestación del gobierno no había sido satisfactoria.<sup>38</sup> Hubo algunos panistas golpeados.

Después del informe amainó un poco la tensión. Los perredistas estaban contentos con su nueva curul y la promesa de Cihuatlán. En el caso de Zapolotlán aducían que los ciudadanos del lugar no habían participado con fuerza en la marcha, por lo que no habían podido conseguir una buena respuesta. Diversas agrupaciones de ciudadanos realizaron un acto de glosa al informe en donde presentaron sus críticas a la gestión del gobernador. La cúpula empresarial del estado después del tercer informe de gobierno declaró que era inaceptable que intereses ajenos quisieran alterar el clima de unidad, sin que con esa acusación señalara a nadie en particular. Manifestaron que confiaban en que habría contundencia en acciones contra la inseguridad, retiraron públicamente uno de los puntos que había servido al debate político: la construcción de la presa El Purgatorio. Indicaron que con las explicaciones que habían recibido tanto de la Comisión Federal de Electricidad como por el titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, se habían disipado sus dudas respecto a tal obra. El conflicto entraba en un compás de espera.

Sólo quedaba la marcha de los panistas de Tepatilán y las sesiones del Colegio Electoral. Al salir la marcha de los jaliscienses de Querétaro a la ciudad de México, Vicente Fox declaró que las demandas de los marchistas constituían un vacío de poder que casi tocaba fondo en el gobierno de Cosío. Aclaró que más que nuevas leyes electorales como la ofrecida por el gobernador de Jalisco, lo que se requería era voluntad política para resolver los conflictos electorales. El diputado federal por Jalisco, Jiménez Remus se pronunció

<sup>38</sup> En un desplegado aparecido un día antes del informe demandaban que el presidente de la República actuara para devolver a Jalisco su tranquilidad. Se autodenominaban ciudadanos en defensa de "nuestra ciudad", y se refería a comerciantes, joyeros, muebleros, zapateros, ferreteros, padres de familia, profesionistas y estudiantes. Ante los asaltos a casas habitación, comercios, robos con lujo de violencia y asesinatos no se había visto una respuesta satisfactoria de parte de las autoridades, por lo que convocaban a que hubiera una marcha del parque de la revolución al centro el día del informe. Esta marcha se efectuó aunque no fue muy concurrida.

en la cámara en el sentido de que el gobierno de Cosío ante los insistentes rumores de que era socio en varios negocios y de que amigos y familiares suyos eran los favorecidos con la entrega de obra pública debía auditarse. El 21 de marzo, en San Juan del Río, todavía con la presencia de Fox la marcha de panistas alteños envió un ultimátum al gobernador. Le daban hasta el día 23 para que resolviera sus demandas (entre las que estaba además de una nueva ley electoral, el castigo de los responsables del fraude electoral, y el respeto al voto). En caso de que esto no sucediera, acudirían ante el presidente de la República para denunciar que no había procedimientos electorales transparentes que garantizaran el voto. También se harían acciones más energéticas en los municipios en conflicto. Se proponían que no pudiera gobernar Cosío.

El Colegio Electoral no rectificó en el caso de Tepatlán. Los marchistas tuvieron que llegar a la ciudad de México cuando se encontraba en contingencia ambiental. Por eso decidieron entrar en fila india para no entorpecer el tránsito. Se corrió el rumor de que el gobierno había negociado con Diego Fernández de Cevallos que se le bajara el tono a esa marcha. El recibimiento de la marcha de panistas alteños en el Ángel de la Independencia fue desangelado. Los marchistas volvieron a sus lugares sin haber logrado los objetivos de su protesta. Parecía un triunfo del gobernador. Tampoco modificó el dictamen relativo a Cihuatlán. Sólo hizo dos cambios por los cuales se instalaron concejos municipales en el municipio de Mazamitla que había sido fuertemente impugnado por panistas lugareños, en Amacueca en donde no se había levantado protesta, pero que había entrado en una negociación entre el gobernador y el PFCRN. Ese partido, que inmediatamente después de las elecciones se había mostrado muy crítico de la actuación del gobierno del estado, con la promesa que culminó en el caso de Amacueca cambió radicalmente. De ahí en adelante, pese a los graves conflictos que sufrió el estado se alió a las posturas oficiales.

Por su parte el PRD acusó a Cosío de haber violado los acuerdos que se habían logrado con la Secretaría de Gobernación en el caso de Cihuatlán, donde esperaban la resolución del conflicto por medio de un concejo municipal. Tanto en Tala como en Cihuatlán fue declarada la resistencia civil. En el primero a través de un frente que agrupaba a partidos opositores; en el segundo por parte de campesinos desprendidos del PRI y el PRD. El PRD demandó juicio político contra

el gobernador. A finales de marzo y principios de abril varios alcaldes tuvieron que asumir el cargo fuera de las presidencias debido a las impugnaciones de los opositores. La toma de protesta ante palacios municipales que parecían cuarteles provocó grandes disgustos. La protesta se instaló en ocho municipios. Dos alcaldías fueron tomadas y dos fueron acordonadas por militantes y simpatizantes de la oposición.

En Acatlán se llegó a un acuerdo por medio de la entrega de los asuntos económicos del municipio a un panista. En Tala el alcalde accedió a prescindir de uno de los regidores priistas más impugnados por la oposición. En Jamay se llegó también a algunas modificaciones en el ayuntamiento, lo cual propició que los ánimos se calmaran. En Poncitlán los priistas inconformes prosiguieron con sus manifestaciones de repudio, y acusó al gobierno de haber violado los derechos humanos de la población. Además de la resistencia civil en Cihuatlán por la que se impedían acciones del nuevo presidente municipal se planeó iniciar frente al palacio de Gobierno en Guadalajara una huelga de hambre. En esto estaban cuando sobrevino el estallido del colector en el sector Reforma, situación que obligó a los perredistas a levantar la huelga.

Si después del informe la iniciativa privada había amainado sus críticas al gobierno de Cosío, si el PAN ya había optado por no utilizar la táctica de las manifestaciones públicas en abril, y ya no quería sumarse a la demanda de exigir el juicio político al gobernador, el estallido provocó gran indignación no sólo entre los afectados sino en grandes sectores de la ciudadanía tapatía. Se exigió de nuevo su renuncia. Las declaraciones de Cosío en cuanto a sus responsabilidades previas a la explosión y a la manera como encaró sus consecuencias cavaron su tumba política. El gobernador achacó la responsabilidad a su compadre Dau quien llevaba tres semanas al frente del ayuntamiento. Éste cayó en la cárcel. Finalmente el mismo Cosío tuvo que pedir licencia.

Las formas como el gobierno federal encaró la crisis de la clase política priista de Jalisco fue con centralismo y antidemocracia. El desprestigio de Cosío amenazaba con tocar al presidente. Esto fue evaluado para la remoción del gobernador. Se evitó que tanto en el recambio de gobernador como del ayuntamiento tapatío se recurriera a las elecciones, como era lo indicado y correspondía a la demanda de los partidos de oposición. Esto hubiera implicado una pérdida del PRI, el cual se encontraba en una situación de gran des-

prestigio. Se impuso a quien estaba al frente de la fracción priista en el Congreso local, Rivera Aceves. Éste, en su anterior cargo, había sido señalado como responsable de muchos conflictos electorales. Pronto recompusieron el equipo de gobierno integrando a personajes de otros grupos políticos que con Cosío habían quedado relegados. Pero los partidos de oposición y la ciudadanía estuvieron ausentes en estas decisiones. El ayuntamiento tapatío después de 36 días de haber sido instalado, por el vacío de poder y falta de capacidad para actuar fue removido por medio de la renuncia y se integró un concejo municipal a través de negociaciones cupulares y de la manera corporativa más antigua, pues a las fuerzas tradicionales (CTM, CROC, CROM, Sindicato de Maestros y Sindicato del Seguro Social, etc.) les fueron respetadas sus posiciones. La manera como se encaró la nueva organización independiente de afectados reveló la poca sensibilidad en cuanto a las formas democráticas del nuevo equipo gobernante que entró con el estigma de no romper del todo los lazos con Cosío. El nuevo gobernador llegó a insinuar que las obras que se habían dado a gentes que apoyaron las campañas priistas no podían ser quitadas, pues eso equivaldría a un suicidio del partido. Algunas formas sí cambiaron, como fue la apertura de diálogo y ciertas concesiones. Al PAN se le dio una posición en el nuevo equipo del gobernador. El PRD volvió a plantear el caso de Cihuatlán. Las formas habían cambiado, pero en el fondo la recomposición de un control autoritario prosiguió.

#### LAS RAZONES DEL HUNDIMIENTO DEL COSIATO

Cuando Guillermo Cosío Vidaurri arrolló literalmente en las elecciones de diciembre de 1988, parecía que el sistema finalmente había encontrado al hombre y al equipo que le permitiría recuperar electoralmente a Jalisco. Apenas unos meses atrás, en las elecciones federales de 1988 el PAN había ganado el 40% de los distritos electorales (siete de los ocho distritos del municipio de Guadalajara, y otro más de la zona metropolitana de la capital tapatía).

Los resultados de las elecciones de diciembre de 1988 eran la prueba manifiesta de que, al menos en Jalisco, las elecciones federales y locales iban por cuerda separada, ante escenarios y con actores diferentes. Las viejas redes clientelares y los vínculos políticos que Cosío tenía en la entidad fi-

nalmente habían revertido los desastrosos resultados electorales que había sufrido el PRI apenas unos meses antes. La cooptación de la vieja y desgastada clase política jalisciense se llevó a cabo por la vía del "hueso" político. Hijos y nietos de ex gobernadores y líderes sindicales pasaron al Congreso local, a comités y comisiones. Los anteriormente desplazados fueron reincorporados a la política local. Se abrieron aún más puertas a la cúpula empresarial para puestos de elección popular a través del partido oficial. Campearon el compadrazgo, el amiguismo y el influyentismo.

Durante las elecciones federales de 1991 en Jalisco se vivió un escenario electoral propio de muchos años atrás, como si no hubiera existido nunca el fenómeno electoral de 1988. El PRI recuperó las veinte diputaciones sin muchos problemas. No obstante, meses más tarde, a principios de 1992, el PRI perdió la más alta cantidad de municipios de su historia. En otros muchos, algunos de los más importantes de la entidad, el partido oficial quedó fuertemente cuestionado.

Paradójicamente un proceso inverso quedó nuevamente de manifiesto. Las elecciones federales y las estatales se comportaron diametralmente opuestas, pero ahora a la baja en las municipales. ¿Qué había cambiado entre las elecciones de finales de los ochenta y de principios de los noventa? Entre los elementos que más destacan se pueden enlistar los siguientes:

1. El gobierno de Cosío trajo consigo no sólo los métodos de control y cooptación propios del viejo sistema político mexicano, sino también sus más detestados vicios que llevó al extremo: nepotismo, corrupción, autoritarismo y actitudes patrimonialistas sobre la función y los recursos públicos. Éstos entraron en contradicción con una sociedad que medrosamente intentaba asomarse a la modernidad. Pero sobre todo ese viejo estilo de gobernar afectó intereses de importantes empresarios locales.

2. La entrega de mayores cuotas de poder a los líderes gremiales tradicionales no significó una más efectiva capacidad de control electoral de las organizaciones corporativas.

3. La llamada clase política jalisciense (es decir, los grupos de la burocracia política, los caciques y los denominados líderes sociales) fue perdiendo fuerza y fue confrontada su autoridad por la opinión pública.

4. La actitud de creciente soberbia llevó al cosiato a creer que las elecciones federales de 1991 habían sido no un referente al presidencialismo sino al propio gobierno esta-

tal. Así, en las nominaciones de los candidatos por el partido oficial no se tomaron en cuenta las fuerzas políticas e intereses ciudadanos locales. Esto provocó disidencias nuevas y numerosos desprendimientos en el PRI. Los electores llegan a romper con el partido gobernante no tanto por factores de carácter nacional sino sobre todo por la traducción de los problemas políticos a nivel municipal, pues es en esta instancia en donde ventilan sus problemas cotidianos y mantienen un constante trato.

5. Por último, la incapacidad manifiesta para resolver los problemas mayormente sentidos y graves (como seguridad pública) contrastó con la imagen de eficiencia con que Cosío se había rodeado cuando era candidato, cuando prometía llevar a Jalisco a la grandeza. Así, el mito de Cosío hizo agua y se hundió.

El interinato de Rivera Aceves si bien al principio logró reducir la presión de la sociedad frente al gobierno, pronto volvió a caer en el aislamiento y en la pérdida de la confianza ciudadana. Muchas de sus declaraciones ante la problemática de la entidad no fueron afortunadas y mostraban de nuevo el divorcio entre el gobierno y la ciudadanía. Esta situación se agravó con el asesinato del cardenal Posadas el 24 de mayo de 1993. Las versiones gubernamentales sobre esta nueva tragedia que enlutó a Jalisco no fueron aceptadas por la población. De nueva cuenta el gobierno perdió credibilidad. Meses después unas encuestas referidas a elecciones presidenciales apuntaron cierta mejoría en el nivel del posible voto priista. No obstante, el PAN jalisciense ha mantenido la seguridad de vencer al partido del Estado debido a los errores del gobierno local. Sin duda las tragedias no serán determinantes, pero no dejarán de pesar en el ánimo de los votantes.

#### INSISTIR EN LA DEMOCRACIA

Entre los elementos que condujeron a la caída de Cosío habría que enumerar, además del malestar por haber cerrado su gobierno en un núcleo en donde el nepotismo y la corrupción campearon, y de la incapacidad de afrontar las necesidades graves de la población, la falta de democracia. Las protestas pre y poselectorales contribuyeron a desestabilizar lo que la mayoría de la ciudadanía fue catalogando como mal gobierno, en donde se había llegado a extremos en

la confusión de la política como negocio. Se dio el desgaste del abuso del poder. Hubo una crisis social y política que demandaba vías democráticas, y que, sin embargo, se intentó resolver por cauces de nuevo impositivos.

Según Dahal, un proceso democrático debería incluir igualdad en la votación, participación efectiva, contar con la información suficiente y con el tiempo de analizarla para saber qué es lo que hay que decidir, control final del programa y no exclusión.<sup>39</sup> Medidas con esos parámetros las elecciones jaliscienses están muy lejos de la democracia, pues la exclusión campea, el voto no se emite libremente, no se cuenta honestamente y no cuenta para la asignación de cargos públicos. El partido del Estado ha mantenido el control de los aparatos electorales y la contienda no se ha dado en términos de igualdad. Lo que resaltó en esta ocasión fue que para amplios sectores de la ciudadanía lo que importaba era más que las formas el fondo mismo de la democracia, la participación real en el proceso. Se rechazaba el hecho de que las impugnaciones tuvieran que pasar por condicionamientos que sólo peritos podrían cubrir y no simples ciudadanos. La legislación electoral en vez de una vía para cuidar la democracia se empezó a visualizar como una muralla que defendía al poder y sus marrullerías de la denuncia clara y palpable de parte de los ciudadanos, la cual no procedía porque no cubría las formas de una legalidad cuestionable. La actuación de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, también fue puesta en entredicho. Más que informar parecían puestos al servicio de la campaña del partido oficial. El peso del gobernador en lo electoral fue determinante. Decidió sobre candidatos, sobre campañas, sobre resultados, sobre negociaciones.

No obstante, la lucha democrática en Jalisco colocó a los comicios locales de 1992 en un sitio privilegiado para una competencia como no se había dado en la entidad. Anteriormente habían surgido protestas, aunque no en tal cantidad como en esta ocasión; se había suscitado alguna confrontación, pero no tanta competencia.<sup>40</sup> A raíz de los comicios se

<sup>39</sup> R. Dahal, *Dilemmas of pluralist Democracy*, Yale University, 1982.

<sup>40</sup> En 1985 a la oposición sólo le habían sido reconocidos tres municipios. Hubo una marcha desde Totatiche a la capital del estado para que se le reconociera el triunfo. En los Altos la efervescencia política se mantuvo por mucho tiempo. Tres años después las protestas por designación de candida-

incrementaron los problemas de gobernabilidad, tanto regionalmente como a nivel de la misma gubernatura. Esto se tradujo en que cualquier manifestación de protesta ciudadana el poder la interpretaba como conspiración. Además de la rebelión en contra de caciques hubo un fuerte rechazo a la imposición de candidaturas más como acción ciudadana que partidaria. Surgió con fuerza un movimiento democratizador. En Jalisco siempre ha habido efervescencia municipal en torno a las elecciones, también marchas desde localidades hacia la capital del estado. Las protestas por los fraudes han sido a veces prolongadas. Lo nuevo fue que esas marchas conjuntaron un descontento mayor entre las poblaciones, en los trayectos se fueron realizando mítines que reafirmaban conciencia de reclamo y de oposición a las formas de gobierno, se logró llamar la atención de la prensa nacional, y la local tuvo que dar cuenta de un fenómeno persistente: el repudio por la manera como se condujeron las elecciones. Otra novedad fue que anteriormente el descontento se focalizaba, mientras en 1992 las impugnaciones organizadas surgieron en muchas regiones. Diversas capas de la población se expresaron. Los grupos de la sociedad, más que partidarios propiamente, utilizaron a los partidos para sus reclamos. Si el gobierno intentó imponer a gobernantes locales para asegurarse negocios, muchos sectores se expresaron en el sentido de que no querían gobiernos que no tenían consenso. Mientras el gobierno calculó que cediendo en puntos secundarios calmaría los ánimos, éstos se exacerbaban cuando no fueron satisfechas demandas que tenían fuerte arraigo, como fue el caso del municipio de Cihuatlán. En todos los municipios en donde el partido del Estado tuvo problemas, éstos provenían de tiempo atrás. Se trató de municipios en los que la ciudadanía ya ha mostrado y exigido que se le tenga en cuenta. La ciudadanía no se quedó sólo en las reglas del recambio. Innovó y puso otras reglas. Lo que anteriormente era exigencia puntual, ahora se convirtió en crítica al estilo de gobernar, a las formas y al fondo de la dominación. Si por los efectos de demostración copió de otras experiencias (marchas), también hizo aportes propios. Produjo una movilización intensa, con antecedentes en sus historias locales, pero que en el nuevo contexto significó algo

tos se dio en más de once municipios, y finalmente le fueron reconocidas a partidos opositores victorias en cinco municipios.

más amplio que rejuegos locales por puestos municipales: se cuestionó al mal gobierno.<sup>41</sup> Se rechaza el fraude pero también el contubernio de poderes, económico y político; la corrupción económica; el mal manejo de los bienes públicos. La burocracia electoral actuó para apuntalar el fraude. Las instancias electorales para supeditarse al poder. Esto las desacreditó junto con éste.

Pese a que por la ley se quería evitar observadores, éstos estuvieron e influyeron en el juicio de la sociedad sobre los procesos. Éste fue un elemento más que contribuyó a configurar preocupación e interés de la sociedad en torno a lo electoral. Las elecciones fueron cuestionadas por los partidos, por ciudadanos, por organismos independientes.

El partido del Estado se vio a la defensiva y fuertemente cuestionado por amplios sectores de la sociedad. Lo que parecía que había ganado en 1991, donde consiguió legal e ilegalmente el mayor número de votos en su historia, paradójicamente se desmoronó. Los efectos del fraude fueron poco duraderos.

El PAN de Jalisco no se había distinguido por su combatividad. Con su marcha alteña a la capital de la República mostró una significativa determinación de lucha. Si bien no tuvo frutos inmediatos, el contacto con un panismo guanajuatense en ascenso repercutió en revitalización de formas y miras. El PRD, al que Cárdenas criticó sus divisiones, consiguió con su marcha desde la costa una mayor presencia regional.

Se dio de hecho una confluencia de una oposición civil desde diferentes trincheras. El enemigo fue único: el gobierno estatal.

El gobierno ya no puede seguir gobernando con base en acciones fraudulentas. La sociedad cada vez lo tolera menos. La fachada de democracia se está viniendo abajo. Si todavía no se puede hablar de una definición clara al respecto, es cada vez más evidente la preocupación creciente en torno al respeto al voto. La búsqueda de la democracia se está convirtiendo en una lucha profundamente popular. Hay un desgaste del poder. La ciudadanía se somete con mayor dificultad a sus imposiciones. Los fraudes impiden percibir si hay poder legítimo emanado de la voluntad popular. Esto

<sup>41</sup> Huelgas de hambre, largas marchas con lo que implican no sólo de cansancio sino de ese peregrinaje testimonial; que revela el convencimiento de una causa simple y profunda: la democracia.

mina consensos. El fraude, intento de predominio del Estado por encima de la sociedad, fincado en el control del aparato electoral, deslegitima los comicios e introduce tensiones innecesarias; atenta contra la representación, no se sabe quiénes son los representantes auténticos; rompe la liga entre el votante y el representante que de la elección debe emerger. Las elecciones deberían expresar el consenso general, esto es quebrado por acciones fraudulentas. Si el poder se acostumbra a su rutina, en la que incluye el fraude, esta situación sólo es quebrada por el enojo popular. Ante el fraude, grandes sectores no se sienten obligados ante poderes espurios. Por eso los repudian. Las elecciones deberían ser una forma de solucionar conflictos. Pero si se recurre al fraude, se complican y se generan nuevos conflictos.

Las elecciones deben determinar quién tiene que gobernar. Cuando esto no está claro sistemáticamente, los ciudadanos se ven en la necesidad de buscar vías para conseguir elecciones convincentes. La sociedad reclama soberanía popular, gobierno que emane de ella, igualdad para todos en las decisiones sobre las autoridades populares.

En las elecciones, como dice Sartori,<sup>42</sup> el pueblo se sabe en función de gobierno. Y es esa situación la que prolonga ante el fraude cuando levanta sus luchas electorales. No quiere perder esa situación de decidir sobre su propio gobierno. El pueblo reclama elecciones libres y respetadas. El disenso, la lucha por la democracia, introduce elementos de pluralismo frente al poder.

Cada vez se va extendiendo la convicción de que para unas elecciones confiables es indispensable avanzar en legislaciones y prácticas que garanticen la libertad y secreto del voto, la no exclusión en el votar y ser votados, y por lo tanto padrones seguros y no amañados; se requieren organismos autónomos, independientes; que el gobierno "saque las manos de las elecciones"; que se limite el gasto del partido oficial en las campañas; que el uso de los recursos por parte de los partidos sea nítido; que haya equidad en la participación electoral, sobre todo en el acceso a los medios de comunicación. Quienes cuenten los votos que lo hagan honestamente, y que los votos cuenten para la asignación de

los cargos públicos. Cualquier propuesta política tiene que pasar por la democracia. Pero todo esto no vendrá como regalo de parte del gobierno. Será fruto de la lucha ciudadana. Que el tiempo de la democracia se está haciendo inaplazable se expresa sobre todo en la insistencia civil que de múltiples formas se manifiesta.

<sup>42</sup> G. Sartori, *Teoría de la democracia*, tomo I, Alianza editorial, México 1987, pág. 116.